

25 años de coyunturas fallidas y periodos malogrados. Semblanza de una aventura intelectual

Luis Humberto Méndez y Berrueta*
Miguel Ángel Romero Miranda*

Hoy, después de 25 años de seguimiento de la realidad mexicana, nos atrevemos a afirmar lo siguiente: la gran coyuntura del 1° de septiembre de 1982 y su no resolución en un nuevo régimen, hizo del quehacer político nacional una acción ambigua y ambivalente que, en su vaguedad, engendró cuatro coyunturas más que no lograron solucionar en definitiva el gran desafío de inicios de los años 80. Hablamos del fraude electoral del 6 julio de 1988, el levantamiento del EZLN el 1° de enero de 1994, el triunfo democrático de la oposición de derecha el 2 de julio del año 2000, y las confusas y poco creíbles elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 que enrarecieron, como nunca, el ambiente político nacional. Cinco coyunturas, cinco periodos de indefinición política cuyo legado, hasta el momento, es la inquietante figura de un Estado híbrido incapaz de salir del rito de paso que inició en la década de los 80.

Hace 25 años, bajo el cobijo institucional de la revista *El Cotidiano*, iniciamos la aventura intelectual de seguir, ordenada y sistemáticamente, lo que nos dio en llamar *la realidad mexicana actual*¹. De dónde partir y

bajo qué criterios, fue nuestra inicial preocupación. No fue del todo difícil decidir el punto de inicio. El criterio que nos guió no lo determinó una construcción abstracta de nuestro pensamiento como investigadores universitarios, tan dados en ese momento a teorizar sobre lo teorizado, evadiendo, disimulando, desfigurando o velando, casi siempre por razones ideológicas, las advertencias de la realidad; ni tampoco fue expresión de una particular

preferencia ideológico-política que nos impusiera un *deber ser* que orientara nuestra reflexión. La cuestión sucedió más bien al revés: la construcción abstracta de nuestro pensamiento y nuestras preferencias políticas se superpusieron a un conjunto de hechos, por demás dramáticos, que la realidad social nos impuso. Partimos de una coyuntura; de un momento privilegiado —por los cambios que prometía— en nuestra historia nacional post-revolucionaria; de un quiebre en nuestro proceso como nación que anunciaba posibles transformaciones —radicales quizá— en las estructuras que, en su permanente y conflictiva interrelación, integraban desde hacía más de medio siglo nuestro Estado-nación.

* Profesores-Investigadores del Departamento de Sociología de la UAM-A.

¹ En el mes de julio de 1984, se publicó el núm. 0 de la revista *El Cotidiano*. En él se hace notar que en la recién nacida revista se dejó un espacio al que se llamó Análisis de Coyuntura, reservado, se afirma, a los investigadores que se habían propuesto un seguimiento sistemático de la realidad mexicana en forma integrada. Se advierte además que no existía la intención de mostrar ningún sustento teórico que le diera sentido a este proceder; “preferimos, declara el Consejo de Redacción, que nuestro *Cotidiano* hable por sí mismo”. Y así fue hasta que varios años después, en el núm. 42 de la revista, julio-

agosto de 1991, al momento en que se festejaba su séptimo aniversario, se incluyó una separata titulada “Sobre el Análisis de Coyuntura: la experiencia de *El Cotidiano*”, donde se hacen explícitos los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos sobre los que se apoyaba esta herramienta de análisis.

En suma: nuestro seguimiento analítico de la realidad mexicana, desde la perspectiva metodológica del *análisis de coyuntura*, da principio con la crisis económico-política de 1982 y se nutre de los desafíos que lanza a los actores sociales y a sus instituciones. Luchas políticas, competencias económicas, oposiciones sociales, resistencias culturales, comportamientos clasistas que bien pueden ser agrupados en un solo reto: dejar atrás una desgastada forma de Estado nacionalista revolucionario, para incursionar en el incierto universo de una sociedad de libre mercado inserta en un mundo global. Abandonar el Estado interventor de corte populista y romper con el *pacto social* que emergió de la Revolución Mexicana; pacto social corporativo con el Estado que, después de un cuarto de siglo y un sinfín de batallas políticas y sociales, aún no encuentra otro que lo sustituya².

Vale aclarar que, a pesar de nuestra consciente supe-
ditación a lo que la realidad nos exhibía, no puede eludirse el hecho de que la determinación de un inicio en cualquier tipo de reflexión sobre lo social, conlleva, a pesar del rigor con que se establezca, un grado de arbitrariedad. Decimos lo anterior porque para no pocos analistas, el punto de partida del proceso que aquí nos ocupa, lo ubican en el movimiento estudiantil de 1968 como detonante del despertar de la sociedad civil; otros lo sitúan en 1977 con la promulgación de la LOPPE como signo de apertura desde el poder a la democracia electoral; nosotros lo ubicamos en 1982, como producto de una crisis sistémica que obligó al poder en turno a aceptar las modalidades externas impuestas para un cambio de régimen.

En lo general, los analistas políticos en México se adhirieron desde los años 80 a una idea, teóricamente construida, que postulaba que México, como la mayoría de los países en el mundo occidental, había iniciado desde mediados de los años 70 del siglo pasado un proceso de transición a la democracia. Nosotros no compartimos, al menos de manera total, este supuesto: en nuestra opinión, México, a partir de 1983, más que iniciar una transición a la democracia, iniciaba un proceso de transición obligada al mundo global. Por supuesto, en el proceso, la idea de transitar a una democracia político-electoral jugaba un papel de suma

² Los contenidos metodológicos del Análisis de Coyuntura desde la perspectiva de la revista *El Cotidiano*, pueden ser revisados en Augusto Bolívar y Rosa Albina Garavito (coordinadores), *México en la década de los 80. La modernización en cifras*, UAM-A, DCSH, México, 1990, véase Introducción, pp. 11-16; y más extensamente en Augusto Bolívar, Rosa Albina Garavito, Luis Méndez B. y Miguel Ángel Romero, *Sobre el Análisis de Coyuntura: la experiencia de El Cotidiano*, Separata de *El Cotidiano* núm. 42, julio-agosto, 1991, pp. I-XXIII.

importancia como legitimante del nuevo orden liberal que se pretendía; sin embargo, consideramos que el fin último del proceso no era la democracia sino la participación clara, precisa y obligada de México en el mundo global. Nacional e internacionalmente se han venido disimulando o justificando, los frecuentes traspies democráticos, pero siempre se está atento al proceso de integración al mundo global desde la égida de nuestros vecinos del norte³.

En este marco, hoy, después de 25 años de seguimiento de la realidad mexicana, nos atrevemos a afirmar lo siguiente: la gran coyuntura de 1982 y su no resolución en un nuevo régimen, hizo del quehacer político nacional una acción ambigua y ambivalente que, en su vaguedad, engendró cuatro coyunturas más que no lograron solucionar en definitiva el gran desafío de inicios de los 80. Hablamos del fraude electoral del 6 de julio de 1988, el levantamiento del EZLN el 1º de enero de 1994, el triunfo democrático de la oposición de derecha el 2 de julio del año 2000, y las confusas y poco creíbles elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006 que enrarecieron, como nunca, el ambiente político nacional. Cinco coyunturas, cinco periodos de indefinición política que mostraron su incapacidad para satisfacer el gran reto de 1983.

Los efectos de esta incertidumbre política resultaron perniciosos para el país: el choque permanente entre un viejo proyecto nacionalista que no muere del todo, con otro de libre mercado que no termina por imponerse, hicieron de la ambigüedad política una ambivalencia; esto es, de tanto pretender ser lo uno y lo otro se terminó por no ser nada. El Estado mexicano se hizo híbrido, perdió identidad. Resultado: enormes vacíos al interior de la sociedad política, en la relación de ésta con la sociedad civil y entre la multitud de organizaciones diversas y contradictorias que la forman; vacíos cubiertos por el estancamiento económico, por la pobreza extrema, por el desempleo, la migración desesperada, la acción política descontrolada, la anomia social, la pérdida de identidad cultural y, especialmente, por la violencia en sus una y mil manifestaciones⁴.

³ Respecto a este particular punto de vista sobre la transición política en México, véase Miriam Alfie Cohen y Luis H. Méndez B., "Tres lustros de transición en México", *El Cotidiano* núm. 89, mayo-junio, 1998; "Sociedad Civil y transición política en México: perfiles y perspectivas", *El Cotidiano* núm. 90, julio-agosto, 1998; "Orden y caos. Transición política o pertenencia obligada. El caso de México", *El Cotidiano* núm. 103, septiembre-octubre, 2000; y Luis H. Méndez B., "El carácter sagrado de la transición en México", *El Cotidiano* núm. 126, julio-agosto, 2004.

⁴ Esta definición sobre el carácter híbrido del Estado mexicano se sustenta en algunos trabajos previos: Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero Miranda, *México: modernidad sin rumbo 1982-2004*, UAM-A-Ediciones y Gráficos Eón, México, 2004; Luis H. Méndez B., "El ambiguo entorno de

Son muchas, y de todo tipo, las consecuencias que trae consigo la hibridez de un Estado, pero quizá la más significativa, por amenazadora, resultó ser la existencia de un poder político fragmentado. A lo largo de 25 años, el poder político legalmente constituido —aunque nunca totalmente legitimado— mostró, desde la primera coyuntura, una enorme debilidad: tener que compartir el ejercicio del poder con las oligarquías nacionales y extranjeras, con las grandes organizaciones mundiales que impulsan la globalización liberal y, lo más inquietante, con el crimen organizado, transformado ya en una poderosísima industria transnacional con enorme influencia política. En estas condiciones nuestra democracia —supuesto objetivo de la transición—, resultó ser igualmente frágil, y, por tanto, en gran medida inútil para enfrentar los grandes problemas nacionales; y por lo que toca a nuestras instituciones en general, en especial las que se ubican en la sociedad política, carecen de una sólida estructura simbólica que las legitime, por tanto, carecen también de la funcionalidad básica que pueda hacerlas eficientes.

De este diagnóstico provisional sobre las características que, pensamos, definen hoy la realidad mexicana actual, se desprende una importante disyuntiva para nuestro análisis: o seguimos considerando al Estado mexicano, y a la nación en su conjunto, dentro de un proceso de transición que en algún momento cumplirá con el gran desafío de la coyuntura de 1983, o suponemos que un conjunto de coyunturas y periodos inconclusos terminaron por imponerle a la realidad mexicana un nuevo y extraño orden políticamente indefinido: podríamos hablar, por ejemplo, de una forma de Estado híbrida y de un orden social que se comprende desde la incertidumbre, la contingencia y el riesgo. Si nos inclinamos por la primera opción, continuaremos hablando de ambigüedades y ambivalencias que enrarecen el ambiente político nacional, esperando el momento privilegiado de la historia, la coyuntura que defina con claridad el nuevo periodo: el Estado liberal de la economía de libre mercado (con preocupaciones más o menos definidas hacia lo social); si pensamos como posible la segunda opción, se tendría que

una coyuntura: la elección presidencial del 2006” en *El Cotidiano* núm. 141, enero-febrero, 2007, pp. 65-76; Luis H. Méndez B., “Reforma del Estado e ingobernabilidad. Historia inconclusa de un orden pendiente” en Luis H. Méndez B. y Marco Antonio Leyva (coordinadores), *El carácter híbrido del Estado mexicano*, volumen 1 de 2000-2006. *Reflexiones acerca de un sexenio conflictivo*, UAM-A-Eón Sociales, 2007, pp. 3-22; Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero Miranda, ¿Hacia donde vamos? Las peligrosas inercias de un orden en construcción”, *idem*, volumen 3, pp. 229-240; Luis H. Méndez B., “La inquietante fragilidad de una democracia electoral imperfecta” en *Revista Política y Cultura*, núm. 29, primavera 2008, pp. 147-170.

aceptar que vivimos un proceso de afianzamiento de un Estado autoritario envuelto en ropajes democráticos, un nuevo orden sujeto en esencia a los caprichos del mundo global. En el primer caso, nuestro seguimiento de la realidad habría de privilegiar los momentos que creemos conducen a la construcción de un Estado liberal de economía de libre mercado; en el segundo, nuestro seguimiento partiría del hecho de que el Estado autoritario que existe se consolida como un poder fragmentado, que ya no se transita hacia ningún lado, que la democracia realmente existente no pretende cambiarle el rumbo al Estado y que su prioridad es la participación en el mundo global de la mano de Estados Unidos.

Este diagnóstico —provisional por necesidad— de la realidad mexicana después de 25 años de presumible transición a la democracia, en el marco económico del libre mercado y dentro de un esquema doctrinario neoliberal, se apoya en un conjunto de postulados básicos resultado de cinco lustros de seguimiento de procesos y cortes analíticos de periodos. En concreto, partimos de las siguientes inferencias empíricamente demostrables:

1. Se rompió el *pacto social* que emergió de la Revolución Mexicana, y un cuarto de siglo después aún no se logra otro que lo sustituya.
2. La fractura más importante se dio con las organizaciones sociales de los trabajadores. De salario real creciente y empleo estable, a caída vertiginosa del primero y precarización del segundo.
3. Este golpe al bienestar de los trabajadores, no ha significado el relanzamiento de la economía mexicana a nuevos niveles de acumulación capitalista; por el contrario, ha sido débil, casi recesivo, el crecimiento económico. Resultado: bajo nivel de competencia en la economía internacional.
4. Hasta la fecha no existe una fuerza política que abandere un *proyecto económico* que concilie el fortalecimiento del mercado interno con fortalecimiento de los índices de productividad.
5. Todo parece indicar que la reforma laboral, hasta ahora pendiente, impondrá la legalización de la flexibilidad en el trabajo sin atender la precariedad laboral. Es difícil pensar que la nueva Ley del Trabajo exprese un nuevo pacto que concilie la flexibilidad laboral con la democracia y la libertad sindicales.
6. Hoy se advierten tres nuevos rasgos de la estructura de la fuerza de trabajo: transnacionalización, informalización y delincuencia organizada. Los tres funcionan como

válvulas de escape a las presiones sobre el mercado de trabajo, y en ese sentido apuntalan la estabilidad social, pero al mismo tiempo la amenazan. Cosas del surrealismo mexicano.

7. Aunque el corporativismo empresarial es otro de los ejes intocados del *viejo régimen*, se dio una recomposición de los grupos económicos: centralización del capital con la consecuente concentración del ingreso; asociación con el capital extranjero, y privilegio al capital financiero (Fobaproa, reforma a los regímenes de pensiones, etc.).
8. Si los grupos empresariales antes estaban sujetos a la férrea mano del presidencialismo, hoy actúan como grupos fácticos de poder: medios de comunicación, grupos empresariales, consorcios y organizaciones transnacionales, delincuencia organizada, entre otros. Un Estado dentro del Estado. Se afianza el modelo autoritario de éste.
9. Se afianzó un nuevo sistema de reglas para la transmisión del poder político: la democracia electoral. Sin embargo, este nuevo sistema no ha significado en esencia la instauración de un régimen democrático. A grandes rasgos, dos son las razones: 1. la columna del viejo corporativismo sindical y del clientelismo aún no han sido sustituidas por la democratización de las organizaciones sociales. El ciudadano es libre de elegir a sus gobernantes, pero no lo es para decidir sobre sus dirigentes sociales; 2. la emergencia de un nuevo sujeto social, los pueblos indios, que no han sido reconocidos como actores políticos con plenos derechos.
10. En el más optimista de los escenarios, México cuenta al día de hoy con una limitada democracia procedimental en el espacio de la sociedad política y con un alarmante autoritarismo en el espacio de la sociedad civil.
11. La alternancia política no significó transición a la democracia.
12. Veinticinco años después, los cambios políticos, económicos y sociales han transformado profundamente al país; sin embargo la esencia de la clase política gobernante (léase el sistema de partidos) sigue anclada al viejo régimen. Relanzar la economía, recuperar liderazgo en América Latina, restablecer el pacto social, disolver el viejo régimen, requiere de liderazgos políticos modernos y democráticos que, al momento, no se ven por ningún lado.
13. Pareciera que las preguntas en política son si se hace realidad el proyecto salinista de un sistema bipartidista. En los hechos, con un PRD actuando como oposición

funcional, ese proyecto se haría realidad. Quizá lo que veamos de aquí al 2012 sea la agonía del viejo nacionalismo paternalista encabezado por AMLO, o su resurgimiento, al que abonan la disputa interna en el PRD, la recomposición del FAP, y el agravamiento de las condiciones sociales a partir de la crisis mundial en curso.

14. A lo largo de 25 años nos hemos venido preguntando sobre la capacidad de las fuerzas sociales y políticas en el país para fortalecer un esquema de democracia política procedimental; hoy es otra la preocupación: existe la cercana posibilidad de que una facción de la vieja clase política priísta regrese a Los Pinos y fortalezca una vieja-nueva forma de Estado autoritario camuflada de democrática, seguramente débil por la cada vez más fragmentada centralidad en el ámbito del ejercicio del poder en México⁵.

Tomando como base el diagnóstico inicialmente reseñado y las inferencias antes expuestas, en las siguientes páginas nos proponemos realizar el análisis político del periodo 1983-2009.

Siéndole fiel al marco metodológico que nos guía, los resultados obtenidos de nuestro largo seguimiento de la realidad mexicana se presentan organizados alrededor de lo que consideramos cinco grandes coyunturas que le marcaron cinco etapas al periodo que nos ocupa:

- a) 1° de septiembre de 1982, VI Informe Presidencial, *Primera Etapa: el gran desafío*.
- b) 6 de julio de 1988, la elección presidencial, *Segunda Etapa: el cambio de régimen en entredicho*.
- c) 1° de enero de 1994, el levantamiento armado del EZLN, *Tercera Etapa: Vacío político, estancamiento económico e ingobernabilidad*.
- d) 6 de julio del 2000, el triunfo electoral de Vicente Fox, *Cuarta Etapa: de la esperanza al desencanto*.
- e) 2 de julio del 2006, el triunfo electoral calderonista, *Quinta Etapa: la legalidad ilegítima*.

Las cinco coyunturas y las cinco etapas arriba listadas, que señalan desde nuestro punto de vista el largo y violento proceso político —aún inconcluso— de cambio de régimen en el país, serán examinadas a través de cuatro ejes: Glo-

⁵ Estos postulados básicos fueron tomados de un documento interno de discusión elaborado por Rosa Albina Garavito en nuestro seminario de Análisis de Coyuntura.

balización, Transición a la Democracia, Sistema Político y Respuesta Social.

Por último, vale precisar que el trabajo que a continuación exponemos se nutre fundamentalmente, explícita e implícitamente, de dos grandes fuentes de información: una, el análisis de coyuntura, publicado en la revista *El Cotidiano* desde el inicio de la publicación en julio de 1984, que se alimenta en lo esencial de los hechos consignados en la prensa nacional; otra, publicaciones diversas que se irán citando a lo largo del texto, referidas a cortes analíticos realizados en nuestro seguimiento de proceso de la realidad mexicana actual, en donde tratamos de profundizar tanto en el análisis político como en la explicación teórica de momentos considerados cruciales en el ya largo proceso de cambio inconcluso que sufren las instituciones en el país, y que ha dado lugar a lo que aquí llamamos un Estado híbrido producto de un rito de paso trunco.

Precisiones metodológicas básicas: acerca del Análisis de Coyuntura⁶

El trabajo realizado a lo largo de 25 años que nos lleva a emitir juicios como los arriba expresados, ha sido guiado por una particular metodología que consideramos importante exponer en sus aspectos centrales para que el lector comprenda a qué nos referimos cuando hablamos de coyuntura y por qué decidimos estructurar este trabajo a través de ellas.

Partimos del reconocimiento que lo inmediato nos abruma especialmente en la política, o dicho en otros términos, el presente es difícilmente discernible en sus aspectos esenciales. Pero al mismo tiempo, también se debe aceptar que, a veces, los procesos políticos, a causa de su repetición se hacen habituales, banales y, por tanto, se consideran monótonos y sabidos. Estas diferentes formas de apreciar lo real político parecieran responder a una cierta “maligna” determinación psicológica o de carácter del observador que hace que nada sea comprensible, o que todo haya estado dicho desde siempre. En este ámbito es que se mueve el sentido común, sea éste vulgar o culto. Sin embargo, el conocimiento efectivo de lo que sucede en política –sin que deje de estar la subjetividad comprendida en sus diversas manifestaciones– dependerá de los momentos significativos por los que atraviesan los procesos sociales y que influyen

⁶ El conjunto de apreciaciones metodológicas que se muestran en este apartado fueron tomadas de Luis Méndez y Augusto Bolívar, *En la génesis de un nuevo orden político*, separata de *El Cotidiano* núm. 67, enero-febrero, 1995, pp. 4-6.

incontestablemente en las perspectivas subjetivas tanto del sentido común como del experto. Mas lo que está en entredicho es si es posible analizar la política presente –sin caer en el subjetivismo excesivo o el objetivismo ingenuo– con algún grado de cientificidad, es decir, en una consideración superior de explicación y comprensión que la que se manifiesta en el sentido común.

Hasta ahora, y quizás por siempre, el análisis del presente político ha sido dejado principalmente en manos de un cierto periodismo, de la grilla politiquera o, en este último tiempo, de grupos de intelectuales que creen poseer la dignidad científica y moral que les permite juzgar respecto lo que realmente pasa del presente político relevante, e indicar cuál es el mal o el buen camino que hay que seguir. La academia, por su parte, antropólogos, sociólogos y científicos sociales en general, paradójicamente, parece mirar con desprecio este aspecto de lo real presente y prefiere refugiarse y observar lo antiguo, lo pasado, a través de la historia o de la filosofía, pues supuestamente estas ciencias se acomodarían mejor a la pretensión de una verdad sólida y contundente que la que podría otorgar una débil reflexión sobre el presente. Para estos guardianes del espíritu de los tiempos, los intentos de seguir metódicamente lo real político no es más que una ciencia chatarra o, por qué no, como decía otro “sociólogo universal”: ¡dejémoslo en chatarra sin más!

Una vez asumida la posibilidad de tratamiento del presente político en forma científica, no basta con la intención de “seguir la realidad política presente” a fin de comprender el sistema político actual. Por muy “riguroso” y “científico” que sea el método utilizado, los procesos seguidos, por su propia naturaleza –tal o cual proyecto económico, o determinado movimiento social, por ejemplo– son formas medianamente consolidadas y, por ello, también expresiones distorsionadas de las contradicciones subyacentes en la realidad socioeconómica que son esencialmente inestables en su conformación como objeto de estudio, y que sólo afloran una vez que el equilibrio de la contradicción se rompe y se deja paso a la posibilidad de una nueva forma de reestructuración del devenir o del orden político.

Aunque exista intención verdadera y vocación científica en la observación de la realidad política actuante, ésta no será suficiente si no existe un “método” que, sin apartarse de lo inmediato, pueda dar cuenta de las condiciones que han permitido su manifestación y que sea capaz de estructurar un sistema de significación que dé cabida en forma comprensible a lo observado. El análisis del presente político, o análisis de la coyuntura, es uno de los intentos

metodológicos que propone abordar ese desafío. Para ello, ha distinguido tres rutinas en su desempeño: el seguimiento de proceso, el estudio de la coyuntura y la construcción de periodos⁷.

El análisis de la coyuntura es tan determinante en el análisis político del presente que, sin él, la realidad aparecería monótona, sin cambio; y, para un espíritu poco atento, como obviamente conocida, siendo que, en rigor, esta realidad es lo menos conocido por estar, entre otras cosas, siempre en constante transformación, preparando, sordamente, el cambio que se hará explícito en una coyuntura⁸. Después las contradicciones volverán a hacerse explícitas y, otra vez el sentido común, culto o no, encontrará de nueva cuenta que todo es evidente, sin importar los desajustes que pudieran existir respecto de sus juicios pasados, y otra vez se equivocará, pues lo que ha surgido como antagonismo explícito, por contundente que se estime, no será más que una posibilidad que busca su realización.

No todo el presente es coyuntura e inmediatamente cognoscible en su banalidad como creería el sentido común culto, pero tampoco es inmediatamente cognoscible aquello que realmente la realidad fragua en su interior. Las contradicciones de lo real inmediato no sólo son insibles a consecuencia de que los signos que revelan su existencia son mínimos y muchas veces inexistentes para la experiencia sensible, sino porque, aunque ellos pudieran develarse, su existencia sería evidentemente incompleta dado que los inevitables cambios futuros la obligan a presentarse como algo necesariamente inacabado y, por lo tanto, siempre será inútil buscar la consistencia en algo que está en gestación.

Seguimiento de proceso y coyuntura son momentos de una misma realidad, instancias necesarias e interdependientes del proceso de investigación. Sin la coyuntura, el seguimiento del proceso es ciego. Este último, a su vez, sin la coyuntura es pasado puro, simple nostalgia estética. Sin embargo, ambos momentos del análisis no deben quedarse solamente en este constante ir y venir entre un presente inmediato y un pasado fijo, que lo llevaría al infinito. Está en la esencia misma del procedimiento la necesidad de

⁷ Véase Augusto Bolívar, Rosa Albina Garavito, Luis Méndez y Miguel Ángel Romero, *Sobre el análisis de coyuntura. La experiencia de El Cotidiano*, separata de *El cotidiano* núm. 42, julio-agosto, 1991.

⁸ Entendemos por coyuntura la explosiva confluencia de diversos procesos generados a lo largo de un periodo, que al manifestar el carácter irreconciliable de sus contradicciones estallan en una crisis política que abre la posibilidad de cambios sustanciales en las formas como se ejerce la dominación. Podríamos llamarla un momento privilegiado de la historia, una bisagra entre uno y otro periodo, un suceso emergente que anuncia la eventualidad de transformación del régimen político.

buscar constantemente las condiciones que le den cauce a una nueva coyuntura. Si se tiene suerte y ésta se produce efectivamente, ahí se cerrará una etapa del proceso de investigación y será necesaria la construcción de un periodo⁹.

La distancia que media entre dos coyunturas es lo que llamamos periodo. En este contexto, el análisis de periodo no es otra cosa que el análisis histórico de lo contemporáneo. Es el momento, dentro del proceso de investigación, en que es necesario detenerse y reflexionar sobre lo obrado. Después de haber realizado la crítica de lo real inmediato y ordenar su devenir —es decir, convertir el método no en un instrumento sino en el desarrollo mismo de lo real— es necesario fijar lo elaborado, a fin de que sean posibles, la autocrítica y la reflexión, como medio para asegurar que la mirada y el juicio no se hayan pervertido con el dogma, la precipitación o la estulticia, permitiendo así recomenzar el análisis del presente político inmediato.

La construcción de periodo es un requisito ineludible en la comprensión de lo real inmediato y constituye la dimensión donde se explican los hechos históricos, aunque en este momento del análisis de coyuntura no se trate de la historia en el sentido general del término (relación de la sucesión de fenómenos sociales pasados hechos comprensibles a través de su descripción o atribución de sentido). El análisis de coyuntura —y las instancias que lo suponen incluida la construcción de periodo— se inscribe en la práctica de la sociología política, la cual, entre otras cosas, siendo plural tanto en las teorías como en las disciplinas que convoca “...no es un cuerpo de certezas; ella se caracteriza por una actitud de investigación; ella es un conjunto de investigaciones que se funden...interrogándose constantemente sobre la construcción de lo político...por consecuencia el camino que se le impone al investigador es el de un relativismo metodológico”¹⁰.

Los periodos no son una realidad ontológica, pero mucho menos una entelequia metafísica. El periodo es construido, pero no es producto del capricho del investigador, aunque suela suceder en otras disciplinas; surge de la mediación entre dos coyunturas que por la evidencia efectiva de existencia ponen límites objetivos al interregno que se quiere analizar, es decir, marcan exigencias propias

⁹ El problema al que nos hemos enfrentado a lo largo de estos 25 años es que la realidad política del país construyó, según nuestro seguimiento de proceso, cinco coyunturas que no se hicieron efectivas; por tanto, seguimos esperando la construcción de un periodo que supere de manera contundente el carácter híbrido de las instituciones políticas engendradas por coyunturas no resueltas.

¹⁰ J. Lagroye, *Sociologie politique*, Presse de la fondation nationale des sciences politiques & Dalloz, France, 1991, pp. 17-18.

del devenir social desde puntos de inflexión reconocidos universalmente. Pero en el análisis del presente, aunque no pocas veces en los trabajos historicistas, los periodos no se abren ni se cierran en forma rígida —a pesar de que formalmente comiencen y terminen en una coyuntura— y a veces pueden ser incluidos en un periodo más largo o ser atravesados por otro periodo que se inicia en su interior. La validez de la construcción de un periodo no reside en la concordancia de la cosa explicada con la explicación sino en la capacidad —muy pragmática— que la construcción del periodo pueda otorgar para explicaciones más vastas, o en la complementación comprensiva de aspectos particulares de la realidad política¹¹. En el análisis de periodo aparecen ligados con igual valor el estudio de las dos coyunturas, el seguimiento de proceso y el análisis del periodo como tal, es decir, las características estructurales que distinguen ese momento histórico de otros. O lo que es lo mismo, no basta el relato o la secuencia de hechos, es necesario determinar sus características estructurales.

La coyuntura de origen del largo periodo de hibridez política del Estado mexicano. 1° de septiembre de 1982: el gran desafío¹²

Corría el año de 1982. Un inquietante tiempo de coyuntura amenazaba la existencia del viejo orden nacionalista creado por la Revolución Mexicana. Enormes contradicciones internas imposibilitaban la integración del país a los nuevos esquemas globalizadores que imponía una nueva modernidad capitalista en el mundo. La desintegración de la economía nacional, junto a la corrupta, y para este momento ineficiente, ideología política del nacionalismo revolucionario, nos pusieron en estado de fragilidad extrema frente al nuevo orden internacional. La “salvación” vino del norte. El gobierno norteamericano, el Fondo Monetario Internacional y la banca privada mundial apoyaron con fuertes

¹¹ Respecto a nuestro caso en particular, si aceptamos como ya antes se dijo en la nota 9, que las cinco coyunturas advertidas desde nuestro seguimiento de proceso nunca se hicieron efectivas, el presente trabajo es un análisis de un periodo muy amplio (1982-2006) que no ha logrado aún definirse, el largo periodo de la ambigüedad y la ambivalencia institucional, podríamos llamarlo, donde se explica la existencia en México de un Estado híbrido.

¹² En lo esencial, el conjunto de hechos que en nuestra opinión representan lo esencial de la etapa, fueron tomados de Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero Miranda, *México: modernidad sin rumbo. 1982-2004*, UAM-A-Ediciones Eón, México, 2004, pp. 19-45, y Luis H. Méndez B. y José Othón Quiroz Trejo, *Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota*, UAM-A, DCSH, México 1994.

préstamos la enferma economía nacional. Demasiado tarde. La crisis había tocado fondo. Ya no existía acumulación de capital en México. Era una crisis del patrón de acumulación de sustitución de importaciones, explicarían fríamente los especialistas. Crisis generada por la cada vez mayor desproporción existente entre lo que comprábamos y lo que vendíamos en nuestra relación comercial con el exterior; en especial con Estados Unidos, declararían, rotundas, las autoridades financieras del país. Pero, también, crisis producto del modelo tecnológico empleado que provocó la existencia de una burguesía nacional en extremo protegida y, por tanto, poco preparada para competir en los mercados internacionales¹³.

Después de las desventuradas devaluaciones del peso y del amenazante proceso inflacionario que crecía sin control, el gobierno lópezportillista se desacreditó. El petróleo y sus promesas de bienestar quedaron sepultados bajo toneladas de rumores que escurrían a lo largo y ancho del país con la paciente tenacidad de la llovizna. La descarnada realidad de una economía en ruinas, que no daba lugar a la esperanza, favorecía, en la sociedad, el morboso deleite de la fantasía destructiva. El imaginario colectivo recibía con facilidad los rumores, recomponiéndolos, reinventándolos, de mil y una maneras, a cual más creativas, en una extraña forma de castigo, de procuración de justicia, cuando las instituciones estatales son incapaces de cumplir con el rol para el que fueron creadas.

El todavía disciplinado aparato corporativo del Estado cumplía fiel, pero inútilmente, con una labor de convencimiento que a nadie convencía. Las organizaciones independientes, generalmente de la llamada izquierda social, en su cotidiana preocupación por sobrevivir a la represión, les faltaba tiempo para reflexionar sobre lo nuevo que se dejaba venir y que poco o nada entendían. Y la burguesía, esa burguesía “chiquita” que creció bajo la protección del Estado de la Revolución, esa burguesía incapaz de arriesgar, mal acostumbrada a las ganancias fáciles, se dedicó a esparcir confusión y desaliento. Resultado: los mecanismos de concertación social y política estaban agotados; la figura presidencial, emblema del nacionalismo revolucionario, se encontraba disminuida; la credibilidad institucional, seriamente lesionada.

Pero el imprevisible sistema político mexicano tenía todavía algo que decir. La fuerza simbólica del Estado revo-

¹³ Los pormenores de la crisis económica de 1982 pueden ser revisados en Miguel Ángel Rivera Ríos, *Crisis y reorganización del capitalismo mexicano*, México, Era, 1986.

lucionario habría de dejar sentir su fuerza. Sin que nadie lo esperara, con todo el enorme peso de la historia, con toda la fuerza de su origen nacionalista, salió a relucir el artículo 27 constitucional: la propiedad en México es del Estado –se nos recordaba– y, así como puede concesionarla, puede también regresar a su control cuando así convenga a los intereses de la patria. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, José López Portillo conmocionaría al país con el anuncio de la nacionalización de la banca comercial y el control generalizado de cambios, señalando además a los empresarios mexicanos como los responsables directos de la situación de crisis que vivía el país.

Qué curioso, muy pronto lo habríamos de saber, la realidad política nacional creaba una paradoja: nuestra inserción al mundo globalizado, a la economía de mercado, al ideario neoliberal, iniciaba con una nacionalización de la banca mexicana. El día 1º de septiembre de 1982, los procesos políticos en México confluyeron creando una coyuntura, un momento privilegiado de nuestra historia que anunciaba la posibilidad de cambios cualitativos en las llamadas estructuras económicas, políticas e ideológicas que, desde más de medio siglo atrás, organizaban a la sociedad mexicana. Se estaba ante la eventualidad de transformaciones efectivas en el ejercicio del poder en México. Era, sin duda, la gran coyuntura que prometía un cambio de régimen. Se generó una posibilidad histórica: transformar el orden nacionalista revolucionario, el Estado interventor, para incursionar en los difíciles y exigentes espacios de la sociedad de libre mercado¹⁴.

A partir de este momento se inicia en el país, según algunos politólogos comprometidos con la instauración de una democracia liberal, un proceso de transición orientado al cambio de un régimen autoritario a otro democrático¹⁵. Para nosotros, según advertimos ya en la introducción, lo que se inició fue un proceso de pertenencia obligada a una economía globalizada sustentada en la idea de libre mercado; esquema de desarrollo económico que incluía, como elemento central de legitimación en el ámbito de la

¹⁴ Referente a la coyuntura de 1982, véase Augusto Bolívar, “El periodo de la transición a la modernidad” en Rosa Albina Garavito y Augusto Bolívar (coordinadores), *México en la década de los ochenta. La modernización en cifras*, Libros de *El Cotidiano*, DCSH UAM-A, México, 1990, pp. 17-64. Trabajo apoyado, entre otras fuentes, en los números de *El Cotidiano* 1, 2, 3, 5 y 9, publicados entre 1984 y 1986.

¹⁵ En lo general, el análisis de la transición en México que realizaron algunos investigadores mexicanos, se apoyaba en la obra de Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario* (4 tomos), en particular el último de ellos, *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Paidós, México, 1988.

ideología, una particular forma de democracia limitada a los procedimientos adecuados para hacer ordenados y creíbles los procesos electorales en un sistema de partidos¹⁶. La coyuntura del 1º de septiembre de 1982 nos ubicó en el nuevo orden internacional como un país de modernidad subordinada que vive un nacional rito de paso suspendido, hasta la fecha, en su etapa liminal; y nos planteó el reto, al igual que a cientos de Estados-nación en el mundo, de cómo habríamos de participar en la nueva modernidad capitalista, en la llamada sociedad del riesgo¹⁷.

En esta primera etapa, nuestra obligada participación en el mundo global tomó directrices específicas. En lo general, advertimos cómo el proceso recayó, todavía, en una nueva clase política encarnada en un Estado preocupado por dejar de ser lo que era, para comenzar a construirse desde los nuevos esquemas impuestos. La empresa no era fácil. Las estructuras nacionalistas, enraizadas en la sociedad, se resistían a los esfuerzos de cambio emprendidos desde el poder. Este fue el tiempo del enfrentamiento y de la derrota de los movimientos sociales que venían desarrollándose desde los años 70¹⁸, y fue también el periodo de los primeros reacomodos al mundo global¹⁹. La ambigüedad se hizo presente en prácticamente todos los espacios de la sociedad y la política. Lo viejo y lo nuevo convivían diariamente. Y, de tanto ser lo uno y lo otro, lo ambiguo comenzó a ser ambivalente. Ya no éramos nacionalistas, pero tampoco neoliberales. Apareció un conjunto de fenómenos extraños que pronto habría de obligarnos a reconocernos como una sociedad híbrida²⁰.

¹⁶ Respecto a esta particular interpretación, véase Miriam Alfie Cohen y Luis H. Méndez B., “Sociedad Civil y transición política en México: perfiles y perspectivas”, *El Cotidiano* núm. 90, julio-agosto, 1998; “Orden y caos. Transición política o pertenencia obligada. El caso de México”, *El Cotidiano* núm. 103, septiembre-octubre, 2000; “El carácter sagrado de la transición en México”, *El Cotidiano* núm. 126, julio-agosto, 2004.

¹⁷ Respecto al concepto de modernidad subordinada, véase “Modernidad tardía y modernidad subordinada” en Luis H. Méndez B. *Ritos de paso trunco: el territorio simbólico maquilador fronterizo*, UAM-A-Ediciones Eón, México, 2005, pp. 47-86.

¹⁸ Véase el libro de Sergio Zermeño, *La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*, Siglo XXI-UNAM, México, 1996.

¹⁹ Nos referimos al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Miguel de la Madrid, en especial a su Plan Inmediato de Reordenación Económica que, con políticas económicas ajenas al Estado interventor, buscaba combatir la inflación y la inestabilidad cambiaria a través de la reordenación del gasto público; la privatización de la empresa paraestatal como un primer paso al cambio estructural de la planta productiva nacional, y en cuanto a las relaciones económicas de México con el exterior, la entrada de México al GATT.

²⁰ Quizá el ejemplo más claro de esta situación lo observamos casi a finales del sexenio de Miguel de la Madrid con la firma del primer Pacto de Solidaridad Económica: en su afán por pactar con el hasta entonces

Desde el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, no era difícil percibir un conjunto de comportamientos encontrados. A la par de las reformas constitucionales que formalmente le abrían paso a la sociedad mexicana a los procesos de inclusión en el mundo global²¹, junto con el impulso al paradigma de la nueva época, el cambio estructural, y a la perentoria exigencia de reconversión de la industria nacional, el imaginario nacionalista persistía en amplios e importantes sectores de la sociedad civil y la sociedad política. Así, mientras el recién llegado gobierno pugnaba por establecer una política económica de emergencia, cuyos contenidos iban en contra del antiguo modelo del Estado interventor, sectores importantes de la población dirigían sus esfuerzos a fortalecer el Estado nacionalista. Los casos más evidentes los advertimos en el movimiento obrero y, más sorprendentemente, en las organizaciones corporativas creadas por el nacionalismo revolucionario, en especial la Confederación de Trabajadores de México, la histórica CTM²².

Esta situación de anormalidad habría de repercutir irremediabilmente en el ámbito de la política. Ante una organización social manipulada en lo fundamental desde el control corporativo partidista creado por los gobiernos revolucionarios, ante un movimiento obrero derrotado y ante una débil oposición política partidaria que no alcanzaba a incomodar al poder en turno, no era difícil suponer que la primera manifestación peligrosa de descontento contra la política gubernamental se diera al interior mismo del partido de Estado.

reticente y desconfiado sector empresarial para enfrentar una nueva crisis económica en diciembre de 1987, el gobierno utilizó corporativamente a los sectores sociales del PRI para que firmaran acuerdos que se encontraban lejos de proteger los intereses de los trabajadores mexicanos del campo y la ciudad. En los intentos por transformar el régimen político de la Revolución Mexicana e introducirnos en un esquema de libre mercado, el gobierno mexicano dispuso de su vieja estructura corporativa partidista. Lo nuevo y lo viejo se entremezclaban dificultando una definición política que esclareciera una nueva forma de Estado.

²¹ Desde la promulgación de la Constitución de 1917, ningún gobierno de la República había realizado tantas reformas a la Carta Magna como el de Miguel de la Madrid; y visto el problema con mayor amplitud, advertimos que casi el 60% de las reformas decretadas a nuestra Constitución a lo largo de casi 90 años, se efectuaron en los últimos 26. Véase *Cámara de Diputados, Información Parlamentaria, Reformas a la Constitución*. Véase también Pilar Berrios y Augusto Bolívar, "El periodo de la reforma del Estado y el nuevo orden ideológico (1982-1996)" en Luis H. Méndez B. (coordinador), *Poder, ideología y respuesta social en México (1982-1996)*, Libros de *El Cotidiano*, UAM-A- Grupo Editorial Eón, México, 1997, pp. 13-62.

²² Las particularidades de este inusual enfrentamiento y sus esperadas soluciones pueden ser revisadas en Luis H. Méndez Berrueta y José Othón Quiroz Trejo, *op. cit.*, pp. 45-52. La CTM, y en general todo el aparato corporativo estatal fue, y sigue siendo, utilizado para la supuesta transformación de nuestras instituciones.

Desde inicios de 1987, el emblemático Partido Revolucionario Institucional (PRI), heredero histórico de los ideales de la Revolución Mexicana, encarnación institucional del gran mito de nuestra historia moderna, comenzó a convulsionarse políticamente al tener que enfrentar los violentos procesos generados por las viejas y nuevas contradicciones que pedían soluciones prontas. La clase política priísta, todavía en la cúpula del poder, enfrentó un inevitable conflicto: mantener la lucha por consolidar el gran reto de la coyuntura de 1982 (la instauración de una sociedad de libre mercado con el consecuente impulso a la reforma del Estado), o el retorno al proyecto nacionalista de la Revolución para enfrentar la crisis y recomponer alianzas sociales rotas.

Las primeras expresiones públicas de este conflicto político comenzaron a darse desde fines de 1986. El día 1° de octubre, la opinión pública recibía, por primera vez, un documento firmado por un grupo de connotados priístas organizados en una corriente al interior del PRI, a la que llamaron "Movimiento de Renovación Democrática", en el que criticaban severamente la política gubernamental.

Nos mueve el reclamo de una sociedad que acusa signos de desesperanza, consternada por la creciente sangría que representa la carga de la deuda externa y sus efectos sobre los niveles de vida; acosada por la inflación, el desempleo, el libertinaje de los precios, el deterioro constante del salario, la injusta remuneración al esfuerzo de los trabajadores del campo y la ciudad²³.

Al año siguiente, en el marco de la XIII Asamblea del PRI, y en explícita referencia a la nueva corriente opositora, el presidente del Revolucionario Institucional, Jorge de la Vega Domínguez, sentenció:

Que todos los priístas sepan que reforzaremos la estructura sectorial de nuestro partido. Que fuera de ella no tienen ni tendrán cabida otro tipo de agrupaciones y de membretes políticos... No toleramos que se invoque a la democracia que practicamos para trastocar nuestra actividad partidista. Desde esta gran Asamblea decimos a todos los que de aquí en adelante no quieran aceptar la voluntad de la inmensa mayoría de los priístas, que renuncien a nuestro partido y que busquen su afiliación en otras organizaciones políticas²⁴.

²³ Véase Miguel Ángel Romero, "Movimiento de Renovación Democrática del PRI", *El Cotidiano* núm. 17, mayo-junio, 1987.

²⁴ *Idem*.

Cuauhtémoc Cárdenas, representante del recién nacido Movimiento de Renovación Democrática del PRI, responde en una carta abierta dirigida a los miembros de su partido que

...el PRI avanza hacia una etapa de autoritarismo antidemocrático, de intolerancias y por lo tanto de retrocesos, pues cerrar las decisiones partidarias más trascendentes, justificándose en el aprendizaje de reglas no descritas es vulnerar conscientemente los derechos democráticos fundamentales de los miembros del partido. Es al mismo tiempo (...) socavar la fuerza de la organización traicionando sus principios y entregándose a la reacción; ...los excesos antidemocráticos y la intransigencia, normas de conducta de la más alta dirigencia partidaria, impiden toda colaboración digna y respetuosa con ella²⁵.

El rompimiento político era inevitable, no había marcha atrás. A los pocos días, los integrantes del Movimiento fueron expulsados del PRI. El cambio estructural, el realismo económico y la reconversión industrial comenzaban a mostrar sus costos políticos. “El asunto de Cuauhtémoc Cárdenas es cuestión acabada –declaró Jorge de la Vega–, lo dicho, dicho está, y lo escrito, escrito está”. La prepotencia de un partido de gobierno acostumbrado por tanto tiempo al poder, no pudo resistir la intromisión de propuestas con sabor a democracia, no pudo soportar el cuestionamiento a arcaicos patrones de comportamiento partidario establecidos por el modelo de dominación política vigente en México a partir de la consolidación del Estado de la Revolución.

Al comenzar 1988, con todo y el flamante Pacto de Solidaridad Económica recién estrenado, los espacios políticos de la sociedad mexicana estaban efervescentes. El Movimiento de Renovación Democrática, lejos de desaparecer, se había transformado en oposición partidaria. Decidido a pelearle al PRI su supremacía política, abandera un proceso de alianza electoral con la oposición partidaria, tradicionalmente manejada por el PRI, que culminará en la creación de un Frente Democrático Nacional (FDN) que, poco después, logrará también la unión programática de la oposición comunista y las organizaciones de la izquierda social²⁶.

²⁵ *Idem.*

²⁶ Véase Luis Méndez y Miguel Ángel Romero M., “Lo que nadie pensaba que fuera... y fue. Historia de un hijo desobediente”, *El Cotidiano* núm. 26, noviembre-diciembre, 1988.

La coyuntura del 6 de julio de 1988: el cambio de régimen en entredicho y la alternativa del liberalismo social

El mito popular de una revolución concebida como la realización de las masas, que por décadas dio consenso y legitimidad a los diferentes gobiernos de la Revolución, dejaba de pertenecer al PRI y a su gobierno. Un nuevo cardenismo, vestido ahora de Frente Democrático, recogía los principios nacionalistas-revolucionarios abandonados por la administración de Miguel de la Madrid; una figura y un nombre simbolizaban un pasado que se resistía a morir. El gran arraigo ciudadano a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del FDN a la Presidencia de la República, expresaba la necesidad de amplios sectores de la población de conservar un mito: el de la revolución popular, el de la promesa de justicia social.

La oposición de derecha, por su parte, nos referimos en particular al Partido Acción Nacional, radicalizaba también sus posiciones. La fuerza partidaria de este instituto político, que hasta 1985 fue en ascenso, comenzaba a decaer por la presencia del FDN y, particularmente, porque el gobierno delamadridista le arrancó varias de sus principales banderas, ganándose así la voluntad del sector empresarial, al menos del de punta. El PAN perdía un apoyo que pudo convertirse en importante instrumento de presión política; sin embargo, esto no impidió que participara activamente, a través de su estrategia de Resistencia Civil, en el proceso político que agudizó la crisis al interior del PRI y del aparato estatal. Un investigador universitario afirmó: Manuel Clouthier, candidato a la Presidencia de la República por el PAN, y los líderes de Acción Nacional, apoyados en un discurso apocalíptico, maniqueo y provocador, pero eficaz, y en una política electoral agresiva y desestabilizadora, que tenía como puntales las movilizaciones y la toma de la calle por los sectores de apoyo panista, realizaron a través de casi ocho meses de campaña una agitación política sin precedentes que alcanzó un considerable grado de penetración en algunos sectores de la sociedad²⁷.

En este ambiente de agitación, los problemas laborales pudieron haberse constituido en elemento detonador de contradicciones acumuladas al interior de la estructura de poder. Los equilibrios inestables en que descansaba el sistema político mexicano, amenazados en ese momento

²⁷ Respecto al movimiento de Resistencia Civil impulsado por el PAN, véase Mario Alejandro Carrillo, “Resistencia civil ¿sin PAN?”, *El Cotidiano* núm. 24, julio-agosto, 1988.

por los movimientos emergentes de las organizaciones políticas, podían haberse alterado desde el sindicalismo mexicano a través de una respuesta convergente, movilizadora y opositora de las organizaciones de trabajadores al Pacto de Solidaridad. No fue así: las contestaciones del sindicalismo independiente nunca pudieron conjuntarse en una acción común ni superar el arraigado carácter gremial de sus luchas. Sus preocupaciones eran muy claras: conservar el empleo y defender el salario. Y las del sindicalismo oficial, mucho más políticas, jugaron a favorecer al poder establecido, a defender el interés corporativo desde la protección del Estado, es decir, inmovilizaron el potencial humano que pudo cambiarle el curso al proceso político electoral²⁸. Es cierto, hubo algunos intentos, pero quedaron en promesas prendidas a una consigna que nadie respetó: “¡Ni una lucha aislada más!”²⁹.

Pero, al margen de lo que hicieran o dejaran de hacer los trabajadores; al margen de la ausencia explícita de los movimientos sociales en la contienda por la presidencia de la República, la crisis política que se venía generando desde mediados de 1987, anunciaba una nueva coyuntura que alcanzaría su clímax en los procesos electorales del 6 de julio de 1988. La realidad política del país creaba otro momento privilegiado donde habría de definirse, o bien la continuación del proyecto de libre mercado iniciado en 1982 por Miguel de la Madrid, o el retorno al viejo proyecto nacionalista, ahora democratizado y sustentado en una nueva alianza política³⁰.

Ante la disyuntiva, el viejo Estado mexicano puso a andar su no menos vieja maquinaria de control político y social. Sus arcaicas instituciones fueron puestas al servicio de un anunciado cambio de régimen. Sin embargo, los mandos corporativos, los mercados electorales cautivos y la siempre ensayada y permanentemente perfeccionada mecánica del fraude instrumentada por el partido en el

poder, nada pudieron contra la voluntad ciudadana que, masivamente, expresó su repudio a una antipopular política económica y votó por una esperanza, por la promesa de justicia social que hizo la Revolución Mexicana, por el mito de un pueblo que ahora encarnaba en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Lo anterior no impidió al gobierno, desde la Secretaría de Gobernación, transgredir la normatividad electoral³¹. En un ambiente político exaltado y confuso, el candidato priísta a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, es oficialmente declarado triunfador de los comicios de julio de 1988. No obstante, la copiosa votación cardenista había puesto al gobierno, a su partido y a su candidato contra la pared. Era la primera vez, en casi cincuenta años, que una oposición triunfante y desestabilizadora continuaba con vida después de una elección presidencial fraudulenta³²; era la primera vez que no se recurría a las viejas prácticas de romper con violencia la posibilidad de existencia de una corriente política opositora de disputar realmente el poder³³. Y esta situación, nueva para la historia política nacional, haría que, a partir de este momento, el ambiente político nacional se volviera incierto.

En los primeros meses después de la elección, nada se pensaba como imposible; no faltaba, incluso, quien asegurara que Carlos Salinas de Gortari nunca llegaría a sentarse en el sillón presidencial. Y no era para menos: a la ilegitimidad del proceso electoral y a la inoperancia mostrada por los bastiones corporativos del PRI, les acompañaba también una situación de crisis económica no resuelta que esperaba todavía los resultados políticos del Pacto de Solidaridad. No era posible, como en otras muchas ocasiones, disfrazar las mil y una irregularidades mostradas a lo largo de la elección. La diputación priísta tuvo que enfrentar un álgido periodo de discusión política en la Cámara de Diputados

²⁸ Véase Juan Molinar Horcasitas, “Crónica del día en que el sistema se cayó-calló”, *El Cotidiano* núm. 25, septiembre-octubre, 1988, pp. 3-8.

²⁹ Las dos únicas corrientes opositoras con posibilidad de disputarle el poder a los gobiernos de la Revolución Mexicana, encabezadas por los generales Almazán (1939) y Enríquez (1952), fueron violentamente desmanteladas pocos días después de efectuados los procesos electorales en que luchaban por la presidencia de la República.

³⁰ Habría que matizar esta afirmación: el Frente Democrático Nacional sufrió de represión oficial antes, durante y después de la elección presidencial de 1988, y ya constituido como Partido de la Revolución Democrática, fue duramente atacado, frecuentemente con violencia, por el gobierno salinista; fuentes indirectas —la prensa y los testimonios de varios actores políticos—, hablan de al menos 300 militantes perredistas muertos durante este sexenio; lo que queremos destacar es el hecho de que a lo largo de cinco décadas fue la primera vez que una corriente opositora al partido oficial, legítimamente triunfadora en la elección presidencias de 1988, no sólo subsistió sino que se transformó en partido de oposición.

²⁸ La nota discordante en este concierto de control corporativo la dio la dirigencia nacional del Sindicato Petrolero, en especial su líder moral, Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como la “Quina”, véase Miguel Ángel Cruz, “El quinismo una historia de Charrismo petrolero”, *El Cotidiano* núm. 28, marzo-abril, 1989.

²⁹ Respecto al problema obrero a inicios de 1988, véase Luis Méndez, “¡Ni una lucha aislada más! Acción Obrera y Pacto de Solidaridad”, *El Cotidiano* núm. 23, mayo-junio, 1988, pp. 84-91; y el Capítulo 4 de Luis H. Méndez Berrueta y José Othón Quiroz, *op. cit.*, pp. 159-200.

³⁰ Las particularidades y los desafíos de la coyuntura de 1988 pueden ser revisadas en Luis Méndez, Miguel Ángel Romero y Augusto Bolívar, “Reencuentro con la legitimidad: dos años de gobierno de Carlos Salinas de Gortari”, *Relaciones* núm. 4, segundo semestre, UAM-X, 1990, pp. 38-57, y en “La coyuntura que llegó desde las urnas” Análisis de Coyuntura, *El Cotidiano* núm. 25, septiembre-octubre, 1988, pp. 36-39.

que evidenció, ante propios y extraños, la enorme magnitud del descalabro sufrido por el partido oficial. Sin embargo, a pesar de la refrescante irrupción democrática de las organizaciones políticas de oposición, a fin de cuentas, con sólo levantar el dedo, se impuso la mayoría priísta, dando legalidad a un proceso de elección viciado que hubiera merecido al menos su cancelación.

No fueron suficientes las pruebas de irregularidades y fraude presentadas, no bastó la presión desde la tribuna ni el permanente plantón de las huestes cardenistas; nada pudo tampoco la denuncia periodística y la capacidad oratoria de los legisladores de oposición, las retiradas en masa del recinto legislativo y la reiterada práctica de impugnación. A fin de cuentas, se impuso la fuerza de un sistema de dominación dispuesto quizá al cambio, pero nunca a entregar, ni siquiera a compartir, el poder. El PRI cerró filas. Dinosaurios y modernizadores se propusieron hacer sentir su peso. La calificación del Colegio Electoral al triunfo de Carlos Salinas es un ejemplo de ello. A pesar del enérgico rechazo de la oposición, el acto fue consumado, legalmente, dentro de los marcos establecidos por la más pura tradición priísta.

Varios factores tuvieron que conjugarse para que esto fuera posible. Uno de ellos, de suma importancia porque permitió que fluyera la mayoría priísta en el Congreso, fue el cambio de orientación política del Partido Acción Nacional, que de una acción opositora confrontada se inclinó rápidamente hacia una acción opositora de concertación. Del radicalismo de la resistencia civil pasó al suave comportamiento de una oposición leal y civilizada capaz de negociar con su contrincante; de la iracunda demanda que exigió sanción legal para los delincuentes electorales, transitó a los comportamientos ambiguos en el momento en que el Colegio Electoral calificaba las elecciones. Este proceso culminaría el 16 de noviembre, cuando la dirección del PAN publicó un documento, "Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia", en que convocaba a todas las fuerzas políticas del país y al gobierno a la reconciliación nacional. El candidato electo del PRI respondió diciendo que era el momento del diálogo con las oposiciones e invitó a los líderes panistas a intercambiar opiniones en torno a consensos posibles³⁴.

Otro factor importante que influyó para que el PRI lograra la calificación de su candidato a la Presidencia de la República lo constituyó el debilitamiento del Frente Democrático Nacional, que comenzó a agotar sus expectativas y sus compromisos como frente. Los partidos y

organizaciones políticas que lo formaban se reagruparon y establecieron nuevas alianzas, y en esta serie de encuentros y desencuentros, de acomodados y reacomodados, se pierde fuerza, se genera desconfianza y se profundiza la incertidumbre sobre la viabilidad de una lucha partidaria que prometía transformaciones de fondo en la vida política nacional. Se iniciaba un proceso de unificación entre diversas facciones de la izquierda mexicana con la corriente democrática escindida del PRI, del que saldría, poco tiempo después, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Un factor más, de mayor determinación que los anteriores, que permitió al gobierno y a su partido salir airosos de la prueba a que los sometió la inesperada irrupción democrática de las corrientes cardenistas, fue sin duda la actuación de los movimientos sociales en este proceso. Para nada resulta exagerado pensar que, si a la airada oposición partidaria la hubiera acompañado una movilizadora, comprometida y organizada respuesta de los movimientos y organizaciones sociales en ese momento en lucha, otra hubiera sido la historia³⁵, pero la tradición política anti-partido de gran parte de las organizaciones de masas —en especial las de izquierda—, la situación de derrota que vivía el movimiento sindical y el enorme peso corporativo depositado sobre grandes sectores organizados de la sociedad, hicieron prácticamente imposible esa posibilidad.

Al final, el día 1° de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari toma posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El relevo sexenal mostraba una situación diferente y favorable para el nuevo gobierno: el presidente electo iba a tomar el poder en un marco de estabilidad externa de la que carecieron sus dos antecesores. Su gobierno comenzaba, después de los sobresaltos de la agitada contienda electoral, con buenos augurios; ni fugas masivas de capital, ni bruscas devaluaciones, ni amenazas de bancos extranjeros, obscurecían el porvenir. Había que reconocerlo: el Pacto de Solidaridad Económica, aunque impopular, daba muestras de efectividad, al menos para el programa gubernamental.

³⁵ Fuera de la acción corporativa de la sociedad mexicana con el Estado de la Revolución, ha existido tradicionalmente, al menos hasta el año que aquí nos ocupa, un divorcio entre partidos políticos y movimientos sociales. Estos últimos, por lo general, no sólo veían con desconfianza la acción de los primeros, sino que era frecuente su enfrentamiento. Así lo demuestra no sólo los juicios de "reformistas" y "electoreros" empleados por organizaciones y movimientos para calificar su acción política, sino, principalmente, el surgimiento desde fines de los años setenta de las coordinadoras de masas como alternativa social a la organización partidaria, y su explícita táctica de no participar en los procesos electorales.

³⁴ Véase Mario Alejandro Carrillo, *op. cit.*

En suma, a finales de 1988 podíamos percibir la existencia de un Estado en proceso de consolidación, de una burguesía que pactaba y de un proletariado a punto de derrumbarse. En diciembre de 1987, apenas un año antes, en medio de amenazas de huelga general —poco convincentes por cierto— y de intolerables actitudes de prepotencia empresarial, el gobierno mexicano impuso a la sociedad un Pacto de Solidaridad Económica que, en el transcurso del año, lograría salir victorioso en el combate contra la inflación y, lo más importante para el proyecto de transformación del Estado, conseguiría atrapar al más poderoso sector del empresariado nacional (la burguesía financiera) en una alianza que prometía un tránsito apaciguado a la modernidad sin bruscas rupturas políticas. Un combate sin cuartel al viejo Estado populista corporativo.

Pero el imaginario nacionalista no había muerto. Su organizada resistencia a la imposición de un nuevo Estado de corte neoliberal era evidente. La lucha de dos absolutos sociales por alcanzar la centralidad del ámbito de lo sagrado continuaba vigente³⁶. Qué mejor ejemplo al respecto que las políticas impulsadas por el nuevo gobierno. Es cierto, se avanzaría en la propuesta iniciada desde el sexenio anterior; sin embargo, la construcción del nuevo proyecto nacional habría de profundizar más la situación híbrida en que se desarrollaba la sociedad civil y la sociedad política en México. La situación ambivalente que vivía el país, quedó claramente plasmada en el postulado ideológico con que Carlos Salinas definió el nuevo tiempo mexicano: liberalismo social. Construcción simbólica alternativa, conciliadora entre absolutos sociales, presuntamente legitimadora, que, desde su nombre, mostraba su sinrazón política: conciliar un orden nacionalista que, desde lo colectivo, luchaba por sobrevivir, con un orden neoliberal que, desde el individualismo doctrinario, luchaba por instalarse. El estatismo absorbente y el neoliberalismo posesivo, declaró el nuevo presidente de la República, son postulados ideológicos no sólo diferentes, sino enemigos de lo que consideraba el nuevo régimen político mexicano: el liberalismo social³⁷.

³⁶ Respecto a los conceptos de absoluto social y de sagrado y su utilización en el proceso de cambio en México, véase Isidoro Moreno, “¿Proceso de secularización o pluralidad de sacralidades en el mundo contemporáneo?” en *Potenza e Impotenza della Memoria. Scritti in onore di Vittorio Dini*, A. Nesti (ed), Roma, 1988, y pp. 170-184. Roma, Tibergraph Ed.; y Luis H. Méndez B., “El carácter sagrado de la transición en México”, *El Cotidiano* núm. 126, julio-agosto, 2004.

³⁷ Respecto a la propuesta de Carlos Salinas sobre un Estado Liberal Social, véase Carlos Salinas de Gortari, “Reformando al Estado”, *nexos*, núm. 146, febrero, 1990; el discurso presidencial del 4 de marzo de 1992 en el aniversario 63 del PRI; Luis H. Méndez B., Augusto Bolívar y Miguel

Después de legitimar un gobierno que nació bajo el signo del fraude³⁸, el presidente Salinas bautiza, en un acto poco liberal, la nueva ideología de un Estado que, se pensaba, estaba presto a reformarse. Como en los mejores tiempos del presidencialismo mexicano, el primer mandatario enjuició y descalificó, desde un poder que pretendía absoluto, las otras opciones políticas que en ese momento jugaban en México. Paradójico comienzo: la nueva ideología del liberalismo social, ni había abandonado ni abandonaría de manera total el “estatismo absorbente”, ni mucho menos habría de alejarse del “neoliberalismo posesivo” que le impuso al país el poder trasnacional a través de recetas de política económica. Se creaba un híbrido, llamado liberalismo social, que, muy a la mexicana, intentó conciliar lo irreconciliable advirtiendo a todos los contendientes políticos quién, y bajo qué reglas, encabezaría los procesos de modernización en el país. En otras palabras: dentro del liberalismo social se aceptaba todo, siempre y cuando se ubicará en la línea trazada por el Presidente de la República.

Si durante medio siglo el vocablo por excelencia de la jerga política nacional fue “Revolución” o “Revolucionario”, nuevamente desde el poder, no desde la sociedad, se impuso el nuevo ideario en un concepto: liberalismo social, término que reiteradamente habríamos de encontrar entre 1992 y 1994, tanto en el encendido discurso partidario, como en la mesurada propuesta institucional.

El aspecto “liberal” del concepto no necesita de mayor explicación. Es larga la lista de hechos, acontecimientos y políticas institucionales que confirman el carácter “liberal” —o “neoliberal”, según se prefiera— del Estado mexicano que se estaba construyendo. Basta señalar, por ejemplo, las disposiciones que el Fondo Monetario Internacional le marcó a nuestro país, cumplidas todas con amplitud, para dar cuenta de esta situación: liberalizar el mercado y la inversión extranjera, privatizar la economía, evitar el excesivo déficit fiscal y la hiperinflación, apoyar el mercado

Ángel Romero, “El bautizo del Estado” en *El Cotidiano* núm. 47, mayo de 1982, y de los mismos autores, “El nacimiento del Estado Liberal Social (1982-1992)”, *El Cotidiano* núm. 50, septiembre-octubre, 1992.

³⁸ Nos referimos a un conjunto de acciones políticas que en poco más de un año le permitieron al gobierno salinista legitimarse ante parte importante de la sociedad civil después del fraude electoral de 1988. Entre los hechos más espectaculares podemos mencionar la creación y consolidación del Programa Nacional de Solidaridad, la privatización de la banca y parte sustancial de la empresa paraestatal, la negociación de la deuda externa, la limpia sindical en los sindicatos de maestros y petroleros, el castigo de cárcel a los culpables del fraude bursátil de diciembre 1987, la legalización de las relaciones con la Iglesia Católica, el sometimiento del movimiento obrero a través de los acuerdos concertados, y la derrota, control o desaparición de gran parte de los movimientos sociales.

doméstico impulsando la competencia e invirtiendo en infraestructura, reducir el papel del Estado en la economía, impulsar a la iniciativa privada, implantar un programa social que permitiera aliviar la pobreza de los sectores sociales más perjudicados.

El aspecto social del concepto es el que merece mayor atención porque muestra el carácter híbrido que contiene. Esta propuesta ideológica, de corta existencia, no concibió lo social como se entendía en el viejo Estado nacionalista-revolucionario; a lo social no se le daba su carácter rector de los procesos económicos —aunque dicha rectoría continuara vigente—, ni su extendida política proteccionista, aunque ésta no hubiera desaparecido del todo: lo social del liberalismo viene, en lo esencial, de la permanencia en el nuevo esquema de algunos rasgos distintivos del sistema político que el Estado nacionalista creó: el carácter de autoridad que el Estado seguía ejerciendo sobre los procesos económicos y sociales, desde una rígida y vertical estructura de poder —ni siquiera rota por la promesa de democracia política del 6 de julio del 88— que mantenía a una clase política enquistada en el PRI y en el aparato de Estado. En este sentido, bien podemos entender lo social como el límite político a lo liberal desde el centralismo estatal, desde el sistema presidencial. En ese momento, lo social era el ingrediente político —autoritario y paternalista— que el Estado mexicano requería para hacer posible el liberalismo económico. Al menos eso era lo que imaginaba la élite política incrustada en el aparato de Estado, y sólo formalmente perteneciente al PRI³⁹.

El híbrido que creaba una ideología del tamaño del liberalismo social, pretendió convertirse en recurso político para mantener un nuevo equilibrio social. Un programa social como el de Solidaridad convivía sin estorbo, al menos así fue por algunos años, con una estrategia económica de marcado carácter neoliberal, orientada a insertar al país en el nuevo orden económico mundial; de la misma manera en que la política de flexibilidad laboral se desarrollaba sin abandonar sustancialmente el esquema corporativo,

y de igual forma en que un proceso de modernización económica se llevara a cabo en el marco de un señalado atraso político.

Para fines de 1993, el gobierno salinista alcanza uno de sus más caros anhelos: la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá⁴⁰. Los esfuerzos de cinco años de gobierno rendían sus frutos. El liberalismo social parecía trascender el sexenio. El Presidente de la República aseguraba que, por primera vez en casi 20 años, la sucesión presidencial se daría en un ambiente económico no sólo estable sino prometedor. El discurso desde el poder divulgaba que la administración salinista no repetiría las angustias devaluatorias del fin del sexenio echeverrista, ni el rompimiento estructural de la economía nacional al término del mandato de López Portillo, ni el sufrido y amenazante remate del periodo de Miguel de la Madrid. Se pregonó que con la firma del TLC se consolidaría el cambio estructural. Y, por su supuesto, la élite política modernizadora que constituyó un cerrado y oculto centro de poder, consideraba que, con lo alcanzado, quedaría disminuida la fuerza de la oposición partidaria para la contienda electoral que se avecinaba. El gobierno y su instituto político, el PRI, propagaban la continuación del liberalismo social como eje alrededor del cual se reformaría, en definitiva, el Estado mexicano.

Las cosas, sabemos bien, sucederían de otra manera. Faltaba muy poco, muy poco todavía, para que comenzaran a derrumbarse las frágiles estructuras políticas y económicas que se venían construyendo. Muy pronto estaríamos ante un inmenso vacío político impregnado de violencia. Las promesas salinistas quedarían disueltas en la confusión de un México alterado, convulsionado, que no sabía cómo volver a reconocerse. Todo comenzaría a ser incierto. Se perdió el rumbo. Se acrecentó nuestro sentimiento de no ser ni lo uno ni lo otro. La contingencia y el riesgo se apoderaron de la sociedad.

³⁹ En otro trabajo manejamos que la élite política que concentraba el poder durante el gobierno salinista no incluía al PRI, desde nuestra perspectiva se había creado un centro oculto del poder por un puñado de políticos formalmente pertenecientes al PRI pero impenetrables a su influencia. Un poder enmascarado que no logró conciliar ni vertical ni horizontalmente con las fuerzas políticas que le eran afines y que terminaría por no soportar a su interior las contradicciones que el mismo creó. Véase Miriam Alfie C. y Luis H. Méndez B., “Orden y centro oculto del poder en México”, Capítulo 3 del libro Luis H. Méndez B. (coordinador) *Poder, ideología y respuesta social en México*, Colección Libros de *El Cotidiano*, UAM-A-Grupo Editorial Eón, México, 1997, pp. 117-184.

⁴⁰ Desde inicios de la discusión alrededor del TLC, la revista *El Cotidiano* tomó esta problemática como central en su seguimiento de la realidad mexicana, y hasta la fecha se han escrito más de 60 artículos relacionados con los mil y un problemas que el acuerdo comercial genera; entre lo más relevante, destaca la relación del TLC con los problemas macroeconómicos del país, con la productividad y la tecnología, con el empleo y los salarios, con el problema de los energéticos, del medio ambiente, del campo mexicano, la educación, la migración, la seguridad nacional, la democracia, entre otros muchos más.

La coyuntura del 1° de enero de 1994: vacío político, estancamiento económico e ingobernabilidad

Cuando todo parecía estar dispuesto para que la nueva clase política continuara el impulso a su proyecto modernizador, sin bruscas alteraciones sociales ni molestas interpelaciones legislativas; cuando desde el aparato estatal se presumía el éxito del Programa Nacional de Solidaridad y el candidato priísta a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, imaginaba un México moderno y competitivo al exterior, así como justo y democrático al interior, otro México, hartado de injusticia, pobreza y marginación, y lejos, muy lejos de las supuestas bondades del recién aceptado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hizo escuchar su voz.

Ajenos a los espacios institucionales, miles de mexicanos, por siglos oprimidos y discriminados, manifestaron violentamente su oposición al proyecto estatal de recuperación económica y al autoritario ejercicio del poder con que se impuso. A las 0:30 horas del día 1.º de enero de 1994, grupos indígenas armados, organizados militarmente en un Ejército nombrado Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomaron por asalto cuatro ciudades de Los Altos de Chiapas, difundieron una declaración de guerra al ejército federal mexicano e hicieron un llamado a los poderes legislativo y judicial para que, declararon: “haciendo uso del derecho constitucional, se deponga al gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari y a su gabinete y en su lugar se instaure un gobierno de transición formado por personalidades y partidos políticos, para que sea éste el que convoque a elecciones en igualdad de circunstancias y no como ahora que serían ilegítimas y desequilibradas”.

A partir de este tormentoso e inesperado inicio de año, el proyecto estatal de recuperación económica y las unilaterales y autoritarias decisiones políticas que creaba para facilitar su imposición, mostraron la fragilidad de los equilibrios sociales en que se apoyaban. No fue desde la lucha partidaria desde donde se afectaría la voluntad transformadora del Estado, mucho menos desde las organizaciones sociales reconocidas y legítimamente establecidas que, teóricamente, podrían haberle puesto freno al despotismo estatal. La amenaza al proyecto modernizador salinista, y en general a la vertical estructura de poder creada por los gobiernos de la Revolución, llegó desde lo más profundo del subdesarrollo mexicano, sin aviso, fuera de la ley y por medio de las armas.

Son históricas y de gran complejidad las causas que podrían explicarnos la respuesta armada organizada por los indígenas chiapanecos; sin embargo, en lo inmediato, no había duda sobre el resentimiento que este sector social manifestó contra las medidas neoliberales ejercidas por el gobierno salinista, en especial, frente a la formulación en 1992 de una nueva Ley Agraria, reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y de convenientes reformas a las leyes de aguas y bosques, orientadas todas ellas a favorecer la inversión privada de capital en el campo. La nueva normatividad constitucional, terminaba con la esperanza de comunidades indígenas y cientos de miles de campesinos que, desde la Revolución del 10, luchan por vivir como propietarios de la tierra que, desde hace siglos, trabajan. Se ignoraron los costos sociales que podrían acarrear tales medidas y, sin duda, los costos políticos: el levantamiento indígena en Chiapas habría de jugar como detonador de un proceso de alteraciones políticas que acabaría en muy poco tiempo con el incipiente proyecto liberal social, creando un gran vacío político, notablemente proclive a la ingobernabilidad, que, hasta el día de hoy, no ha podido ser cubierto. De tal magnitud era el problema, que ni siquiera los considerables avances logrados en el proceso de democratización a partir de 1994 consiguieron terminar con la grave inestabilidad política que, desde entonces, vive el país.

Pronto aprendimos que era incorrecto ubicar al EZLN como un grupo guerrillero. El desarrollo del conflicto nos obligó a entenderlo, no ya como una guerrilla, en el sentido tradicional del concepto, sino como una organización política de izquierda centro, armada y en la clandestinidad, empeñada en impulsar un proceso de democratización del país bajo la responsabilidad de algunos sectores significativos de la sociedad civil. Por supuesto, su idea de democracia se oponía a la democracia liberal que en ese momento impulsaban el Estado y los partidos políticos, y siempre fue, y sigue siendo, contraria a las instituciones democráticas que hoy definen a la democracia mexicana. El sentido de su propuesta iba más allá del perfeccionamiento de los procedimientos electorales para hacer más creíbles los resultados comiciales. Su lucha se empeñó en lograr instaurar una democracia que alcanzara los diversos, plurales y contradictorios espacios donde se desarrolla la sociedad civil; que garantizara la existencia real de una República Federal con su equilibrio de poderes y con su autonomía municipal; que impusiera la obligación estatal de promover y consolidar una justicia social no corporativa, y un sistema de impartición de justicia verosímil capaz de terminar con la impunidad y los privilegios. En suma, una

democracia encargada de sepultar el viejo sistema político presidencialista, de partido de gobierno, corporativo y antidemocrático⁴¹.

Otra vez la realidad nos ponía frente a una coyuntura. Los procesos políticos en el país convergieron nuevamente de manera explosiva, a tal punto que, desde este momento, nuestro obligado tránsito a una sociedad de libre mercado dejaba de ser ordenado y dirigido desde el viejo Estado rebautizado por Carlos Salinas como Liberal Social. La violencia acompañaría desde entonces los procesos sociales y políticos en el país, los momentos de ingobernabilidad comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, y la economía nacional sufriría la peor de sus crisis⁴².

El movimiento zapatista se convirtió para nosotros en punto de partida privilegiado en la comprensión de los resquebrajamientos que sufría el sistema político mexicano. Intentábamos considerar estructuralmente, con la máxima profundidad posible, ese momento histórico singular, la coyuntura, a fin de determinar las posibilidades reales de que se constituyera en punto de partida de un nuevo orden social, diferente al que había prevalecido hasta antes de 1988 pero, fundamentalmente, con anterioridad a 1982. La coyuntura del 1° de enero de 1994, dejó al descubierto tres problemas centrales de cuya solución dependía la posible construcción de un nuevo régimen político en México: las posibilidades de la insurrección zapatista, la situación del

⁴¹ Lo que de manera sintética se muestra en estas páginas respecto al levantamiento zapatista, es resumen de una reflexión más amplia que realizamos al interior de *El Cotidiano*. Al respecto pueden revisarse los siguientes artículos: de Augusto Bolívar y Luis Méndez, "El proyecto estatal en entredicho: sublevación armada y respuesta militar en Chiapas", *El Cotidiano* núm. 60, enero-febrero, 1994; "Entre el consenso pasivo y la crítica de las armas", *El Cotidiano* núm. 61, marzo-abril, 1994; "La hora de las definiciones pendientes: jornadas para la paz y la reconciliación en Chiapas", *El Cotidiano* núm. 63, julio-agosto, 1994; "En la génesis de un nuevo orden político", separata de *El Cotidiano* núm. 67, enero-febrero, 1995; de Luis Méndez y Miguel Ángel Romero, "Chiapas: semblanza de un conflicto (enero de 1994-febrero de 1996)", Separata de *El Cotidiano* núm. 76, mayo-junio, 1996; de Luis Méndez, "Orden e ingobernabilidad", en Luis H. Méndez B. (coordinador), *Poder, ideología y respuesta social en México (1982-1996)*, Colección Libros de *El Cotidiano*, UAM-A - Grupo Editorial Eón, México, 1997.

⁴² La violencia se inició en 1994 con el levantamiento armado del EZLN y el permanente hostigamiento de los gobiernos federal y estatal a la población indígena en la región de los Altos de Chiapas; pero habría de extenderse también a la élite política con los asesinatos de los políticos priístas Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República y Francisco Ruiz Massieu candidato a liderar la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, para culminar violentando la esfera de la economía y la calidad de vida de los mexicanos al estallar la crisis de diciembre de 1994. Véase Miriam Alfie y Luis H. Méndez B., "Orden y centro oculto del poder en México", *op. cit.*

centro oculto de poder salinista y la demanda de democracia económica y política que enarbolaba el EZLN.

Respecto al primero de los problemas planteados, constatábamos con cierta ligereza, aunque no sin razón, que el conflicto armado había derivado en un diálogo, que si bien deseado por la mayoría de la ciudadanía, al cambiar los guerrilleros de terreno —de la guerra a la política— habían perdido parte importante de su capacidad contestataria del orden vigente, cuestión que estaba al centro de sus demandas originarias. Sin embargo, la respuesta negativa de los rebeldes zapatistas a las proposiciones hechas por el Comisionado para la Paz, Manuel Camacho Solís, designado por el presidente Salinas, puso en cuestión, nuevamente, el orden vigente por parte del EZLN, y la posterior renuncia de Manuel Camacho a su cargo de mediador volvieron a tensar la contradicción entre cambio y restauración en el sistema político. El resultado favorable al PRI en las elecciones de agosto dejó en suspenso la línea de desobediencia civil propugnada en un primer momento por el EZLN, y los conflictos al interior del PRD, que anunciaban una relación más flexible con el Partido oficial, parecían contribuir también a que esta acción no prosperara demasiado. No obstante, tantos meses de ingobernabilidad en Chiapas habían logrado radicalizar las posiciones de los diferentes sectores sociales en la entidad, tanto que, después de la elección presidencial, la región se encontraba al borde de la guerra civil, situación que, obviamente, se constituía como obstáculo al deseo del nuevo gobierno de instaurar un nuevo orden político⁴³.

En cuanto al segundo de los problemas, el análisis político partía necesariamente del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priísta a la Presidencia de la República, hecho que puso en evidencia que el centro oculto del poder, su carácter más secreto, había sido descuidado y postergado al momento de imaginar cómo podría ser la nueva forma en que se ejercería el poder al final del sexenio salinista. En los primeros análisis se descubre —como hipótesis— que si bien se puede hablar de una obvia contradicción entre los aparatos de gobierno, incluido el Partido oficial, y el resto de la sociedad política, faltaba mucho por analizar: no sólo las contradicciones al interior del aparato de gobierno, cuestión ya develada desde hace años con el surgimiento de la élite en el poder de los años ochenta y el proceso de desalojo de antiguos cotos de poder al interior del PRI, sino, sobre todo, las contradicciones e instancias de poder

⁴³ El relato político-militar de lo acontecido en 1994 puede ser revisado en Luis Méndez y Augusto Bolívar, "En la génesis de un nuevo orden político", *op. cit.*

y control hasta ahora no suficientemente vistas, al interior de esta misma élite⁴⁴.

Por último, el tercer gran problema que expresó la coyuntura, la democracia económica y política, permanecía en el trasfondo de la temática de la insurrección y del centro oculto del poder: la demanda de una parte “importante” de la sociedad mexicana, por hacer efectiva la democracia económica para las grandes mayorías explotadas, la exigencia del ejercicio transparente del poder y una real reforma política capaz de generar procesos electorales limpios.

En suma, el análisis del periodo (malogrado como los anteriores), creado por la coyuntura del 1° de enero del 94 (igualmente fallida como las que le precedieron), se estructuró alrededor de las siguientes problemáticas no resueltas: el cuestionamiento del orden a través de un ataque directo y armado al gobierno constituido; la demanda de justicia para los más oprimidos que significó un cuestionamiento al orden económico y jurídico vigente; una demanda inminente de cambio en las formas de reproducción del sistema político, especialmente las referidas a los procesos de representación, y, por último, las “nuevas” formas e instancias de acción ocultas en el centro mismo del poder.

De alguna manera, poco espectacular por cierto, el día 21 de agosto, día de la elección presidencial, se pretendió cerrar, sin lograrlo, el intenso periodo que había inaugurado el levantamiento armado en Chiapas. El desafío que planteó la coyuntura había sido enorme: iniciar un verdadero tránsito a la democracia que empezaría por imponer, a través de la voluntad ciudadana expresada en el voto, un gobierno de transición encargado de romper con el viejo estilo de gobernar el país. Los resultados electorales iban a contradecir esta intención: el PRI terminó copando los espacios políticos en disputa. Todo parecía indicar que, aunque manchado por el fraude, este triunfo permitiría al gobierno y a su partido recuperar la cuestionada legitimidad al orden establecido. Se dijo que el voto a favor del PRI había sido un voto por la paz, y el recién electo primer magistrado de la nación, Ernesto Zedillo Ponce de León, satisfecho de su triunfo, ofrecía al país cambios de fondo al sistema político mexicano⁴⁵. Efímero fue, sin embargo,

⁴⁴ Más allá de los vericuetos policiales y jurídicos, sería adecuado profundizar en tres cuestiones básicas para entender algo más del asesinato de Luis Donaldo Colosio: el funcionamiento de los aparatos de seguridad interna del gobierno, las formas de presión de los grupos financieros ligados al PRI y la presencia en el gobierno de los grupos ligados al narcotráfico. Véase Augusto Bolívar y Luis Méndez, “La ruptura en el centro del poder”, *El Cotidiano* núm. 62, mayo-junio, 1994.

⁴⁵ Acerca de la elección presidencial del 21 de agosto, véase *El Cotidiano* núm. 65, *Proceso electoral 1994*, noviembre, 1994.

este inicial y simulado reencuentro con la legitimidad. Pocas semanas después de los comicios de agosto, la acción criminal iba a poner de nueva cuenta en entredicho a las instituciones. El nuevo periodo iniciaba con una fuerte crisis de credibilidad en el régimen. Por lo demás, fiel reflejo de esta situación de incertidumbre política, los riesgos a la paz que engendró el conflicto indígena campesino en Chiapas, lejos de disminuir, se incrementaban. Pero lo peor vendría pocos meses después con el llamado “error de diciembre”: la protegida economía mexicana, financieramente blindada, volvería a derrumbarse. En muy poco tiempo se convirtió en un mal chiste el slogan de la campaña de Ernesto Zedillo: “El Bienestar para la Familia”⁴⁶.

Las modificaciones constitucionales y los cambios de fondo realizados a la estructura electoral que prometían ciudadanizar el IFE, no iban a ser suficientes para hacer creíbles los resultados electorales de agosto. El presidente del Consejo General del IFE seguía siendo el Secretario de Gobernación y sobre él recaían aún parte importante de las decisiones; y los consejeros ciudadanos, figuras prominentes en el nuevo esquema de organización electoral, tenían limitadas todavía sus funciones. Por otro lado, en franca oposición al proceso de reforma de las estructuras del IFE, la supuesta ciudadanización de los consejos locales y distritales había quedado bajo el control de personajes vinculados al PRI o al aparato estatal.

Y si a lo anterior agregamos un padrón electoral que, a pesar de haber sido sujeto a un sinnúmero de auditorías externas, siguió siendo motivo de desconfianza, unos medios de comunicación que transformaron la información noticiosa en opinión favorable al candidato oficial y una franca acción desde el poder federal, regional y local para comprar o coaccionar el voto, no resulta extraño que, a pesar de las importantes reformas al orden jurídico electoral, a pesar de la vigilancia ciudadana en los comicios y a pesar de la buena voluntad expuesta por los consejeros del IFE, los resultados electorales, lejos de expresar confianza y credibilidad, mantuvieron la suspicacia de los dos principales partidos de oposición y de parte importante de la ciudadanía organizada.

Vale recordar, por objetivo, el informe presentado por Alianza Cívica en relación a los resultados electorales de esta elección. Con argumentos sustentados en la obser-

⁴⁶ Acerca de la crisis financiera de diciembre de 1994, véase Cristian Leriche, “Mercados internacionales y México”, y Fernando Chávez, “Colapso cambiario y ajustes macroeconómicos” en *El Cotidiano* núm. 68, marzo-abril, 1995.

vación directa del proceso, Alianza Cívica dio a conocer un sinnúmero de irregularidades que la llevaron a concluir lo siguiente: “desde la perspectiva de estas irregularidades resulta evidente que hubo dos elecciones claramente diferenciadas: una en la zona urbana, moderna, en la que las elecciones son relativamente limpias, y otra en las zonas rurales, especialmente del sur, en las que hay una incidencia muy alta de violaciones graves contra los ciudadanos... las casillas rurales de los estados del sur, en las que se encuentran también índices muy altos de pobreza y marginalidad, de lucha campesina y conflictividad política, tuvieron violaciones graves durante la elección. Existen suficientes indicios para cuestionar fuertemente el proceso electoral en esta zona del país, dado el conjunto de delitos y prácticas fraudulentas que lo violentaron”.

No obstante lo anterior, Alianza Cívica concluye de su informe que “no se puede descalificar de golpe y en bloque toda la elección”, aunque enfatizan que “tampoco se puede aceptar el triunfalismo que pretende hacer de esta elección un ejemplo de transparencia y limpieza... el impacto cuantitativo de estos hechos –afirmaron– no puede calcularse con certeza y precisión. Es probable que no alteren el resultado final sobre el triunfador de la elección presidencial. Sin embargo, altera la correlación de fuerzas electorales de los partidos a nivel nacional, regional y local, la composición de la Cámara de Diputados y posiblemente la de Senadores, generando una imagen aparente de predominio del partido de gobierno”⁴⁷.

Resumiendo: resultaba preocupante que, al año de iniciada la lucha en el sureste mexicano, las soluciones no sólo no avanzaran, sino que no se percibían alternativas posibles que pudieran ser ejecutadas en el corto plazo. En realidad, el conflicto se encontraba, después de la elección presidencial, igual que en los primeros días del mes de enero, cuando las dos partes involucradas habían acordado la suspensión del fuego. Y lo peor era que, desde el gobierno federal, parecía declinar la voluntad de solución bilateral a los problemas planteados por la lucha del EZLN. La declaración del presidente Salinas afirmando que el conflicto chiapaneco no sería solucionado en su administración, apuntaba en este sentido.

Existía un grave problema político en Chiapas, sin solución, que ponía a la región en un franco estado de ingobernabilidad, situación que tenía que ver, de manera directa, con la profunda crisis de reproducción del poder que vivía

el aparato estatal y su partido. Primero fue la insensibilidad política mostrada por el Ejecutivo Federal y por su partido al permitir que se impulsara un proceso electoral donde, desde el primer día de 1994, no se percibían acciones de gobierno capaces de darle una salida política al conflicto planteado por el EZLN. Después vino la prepotencia: si en algún lugar hubo irregularidades electorales graves, ese lugar fue Chiapas. Violentando la voluntad de una gran mayoría de ciudadanos chiapanecos, se impuso el triunfo del candidato priísta. La respuesta social fue inmediata, lo mismo que su resultado: un fuerte incremento de la violencia en la entidad, acentuándose así el estado de ingobernabilidad que se vivía en esta región del sureste mexicano. No había duda, el fraude maquinado en estas latitudes había sido una verdadera provocación y una apuesta por la guerra. Por último, el asesinato del líder priísta, José Francisco Ruiz Massieu, y la aguda crisis de legitimidad que sufrió el PRI a partir de este hecho, se confabularon también en contra de una posible solución al conflicto chiapaneco desde la saliente administración federal.

Para principios de 1995, la situación en Chiapas era alarmante: un alto grado de incertidumbre política por el rompimiento del diálogo con el Gobierno Federal que se había prolongado más de seis meses, presencia política y/o militar del EZLN en una franja del territorio chiapaneco, aumento de la militarización en el estado, cerca de 20 mil indígenas expulsados de sus comunidades, intensa movilización social derivada del conflicto poselectoral en la entidad, profunda afectación a la estructura de gobierno (más de un tercio de los 111 municipios de la entidad, tenían autoridades irregulares o ilegales). La lucha campesina por la demanda de tierra había entrado en una fase de radicalización y politización incrementándose la violencia social y la represión en todo el estado⁴⁸.

El nuevo orden que se pretendió construir a partir de 1983, bautizado en 1992 por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, como Liberal Social, tuvo como uno de sus efectos más perversos la edificación de un poder enmascarado, al que denominamos Centro Oculto del Poder, que terminó por exacerbar hasta el límite las contradicciones que minaban desde 1983 la coherencia institucional de la clase política. El Centro Oculto del Poder no resistió el reclamo político de la élite ni el cuestionamiento armado del más desprotegido sector de la sociedad mexicana. Se quebró, y su caída desestabilizó

⁴⁷Véase Informe de Alianza Cívica respecto a las elecciones federales del 21 de agosto de 1994 en Luis Méndez y Augusto Bolívar, “En la génesis de un nuevo orden político”, *op. cit.*

⁴⁸Véase Luis Hernández Navarro, “Los péndulos del poder: negociación y conflicto en Chiapas”, *El Cotidiano* núm. 76, mayo-junio, 1996.

el otrora inamovible sistema político mexicano, a tal punto que, desde el inicio del mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, la nueva administración mostró, como nunca en casi medio siglo de gobiernos “revolucionarios” y dos sexenios de gobiernos “modernizantes”, una patente incapacidad para dirigir el país. Las aparentes soluciones al quiebre financiero de diciembre, los devastadores efectos de un desarticulado aparato productivo sobre los niveles de vida de la población, los inquietantes movimientos al interior del Poder Ejecutivo, los cada vez más riesgosos conflictos poselectorales y el pasmo institucional hacia el justo reclamo de amplios sectores sociales, son en buena medida expresión concentrada de una lucha política entre grupos diversos de un poder fragmentado que, en el capricho por alcanzar su interés inmediato, orillaron al país a un estado de ingobernabilidad hasta la fecha no resuelto.

Quizá lo más lesivo para el pueblo de México en este sexenio de desconcierto político, fue la ilegal transformación de un fideicomiso privado llamado Fobaproa⁴⁹, en una nueva empresa paraestatal que, arbitrariamente, transformó el pasivo contingente del sistema bancario en deuda pública. Los enormes costos de la protección estatal a los turbios manejos financieros de la clase empresarial creada por el gobierno salinista —de los cuales se aprovechó también la élite política en sus cruzadas electorales— junto al injustificado amparo del gobierno zedillista al capital financiero invertido en México, concluyeron en una monstruosa deuda interna, cargada a los contribuyentes, que, desde entonces, afecta gravemente los presupuestos anuales en materia de seguridad social y educación.

Si algo define al gobierno zedillista, es su comportamiento como administrador —muy efectivo por cierto— de los intereses de los grandes inversionistas, en especial del capital extranjero: fiel cumplidor, también, de las recomendaciones del Acuerdo de Washington. Un excelente empleado del interés trasnacional. Es difícil que alguien pueda imaginar hoy al presidente Zedillo como representante de los intereses de la mayoría del pueblo mexicano. Sin embargo, nuevamente aparece con este proceder del gobierno en turno, la ambivalencia que nos distingue desde 1983, el carácter híbrido de nuestras relaciones con el mundo y con nosotros mismos. Cómo entender que un presidente como Ernesto Zedillo, fiel profesante, dogmático activista de la sociedad de mercado, haya impedido, con la intervención estatal, que el mercado financiero funcionara libremente.

⁴⁹ Véase *El Cotidiano* núm. 92, *Crisis Bancaria y Financiera*, noviembre-diciembre, 1998.

Por supuesto, la respuesta social hizo su aparición, cada vez con menos fuerza pero con más radicalidad; la violencia política también se hizo presente en *Acteal* y *Aguas Blancas*⁵⁰, como inquietante recordatorio de la impunidad de que gozaba, y sigue gozando, el poder gubernamental en cualquiera de sus esferas de influencia; la inseguridad pública y la desigual procuración de justicia incrementaron el descontento social, y los niveles de vida de la población mexicana, su calidad de existencia, seguían dramáticamente a la baja. Si de algo puede sentir satisfacción el gobierno zedillista, es que la democracia política, reducida a los aspectos procedimentales de los procesos de elección popular, comenzó a funcionar a través de instituciones electorales totalmente independientes del control estatal⁵¹. El problema fue, y sigue siendo, que esta democracia limitada no ha sido capaz de controlar la estabilidad política del país, ni el despertar de la economía, ni el bienestar de los mexicanos; y a partir de las elecciones del 2006, resulta evidente su retroceso a formas autoritarias de acción política sustentadas en el fraude y la corrupción producto de la impunidad.

La coyuntura que promovió el levantamiento armado en Chiapas el 1° de enero de 1994 continúa abierta. El liberalismo social, como seudo propuesta de orden para el país, desapareció de la escena política y, desde entonces, ningún proyecto de nación alternativo ha permitido consolidar un nuevo periodo. A pesar de nuestra tan festejada democracia, al menos hasta antes del 2006, gobiernos y partidos políticos se recrean en sus contradicciones, y muestran su gran incapacidad para superar la histórica herencia de la Revolución en materia de cultura política: al margen de posibles acuerdos o de discusiones de alternativas conjuntas, el objetivo supremo es alcanzar el poder y, para ello, es necesario eliminar al adversario. En aquellos tiempos fue a través de las armas, hoy los métodos son técnicamente más sofisticados, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Resultado: vacío político y amenaza permanente de ingobernabilidad.

Pero la historia no es una sucesión cronológica de acontecimientos. Los sucesos construyen, en altibajos, las realidades que definen los momentos históricos. En un momento de nuestro incierto caminar, la esperanza renació. Las elecciones presidenciales del 2000, habrían de mostrarnos algo no sólo nuevo, sino prometedor. Una opción de

⁵⁰ Véase *Guerrero 95: represión y muerte*, Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, 1996 y Hermann Bellinghausen, *Acteal. Crimen de Estado*, Ediciones *La Jornada*, México, 2009.

⁵¹ Véase *El Cotidiano* núm. 85, 6 de Julio: *el tiempo de la democracia*, septiembre-octubre, 1997.

derecha tuvo la capacidad de aglutinar mayoritariamente, a través del llamado “voto útil”, la voluntad ciudadana. Por primera vez en 70 años, el partido de Estado perdía una elección presidencial. Se abrió de inmediato la posibilidad de terminar con el enrarecimiento político que vivía el país. La realidad política del país creó una nueva coyuntura que prometía terminar con el carácter híbrido del Estado mexicano, para construir el régimen de la modernidad librecambista. En medio de una enorme verbena popular que el 6 de julio del 2000 festejaba el triunfo de Vicente Fox, se inició el llamado “gobierno del cambio”.

La coyuntura del 6 de julio del 2000: de la esperanza al desencanto⁵²

La victoria electoral de Vicente Fox creó una memorable coyuntura en la vida política del país. Y no era para menos. El nuevo tiempo prometía ponerle fin al régimen presidencialista autoritario enquistado en setenta años de nuestra historia. La enorme maquinaria priísta había sido electoralmente derrotada. El poderoso partido de Estado, heredero de los valores nacionalistas creados por la Revolución Mexicana, e impulsor, desde diciembre de 1982, de nuestra aventura neoliberal, iniciaba un obligado proceso de reestructuración. Por primera vez, desde 1929, la oposición partidaria, en este caso capitaneada por el PAN, ganaba una elección presidencial. La alternancia en el poder se constituía como el elemento central de la llamada transición democrática.

Pero no todo era miel sobre hojuelas: el PAN había ganado la elección presidencial, pero era minoría en el Congreso de la Unión. Se continuaba la tendencia, iniciada en 1997, de gobierno dividido. Lograr el cambio prometido exigía iniciar un proceso de negociación que permitiera construir los consensos necesarios para gobernar y realizar los cambios estructurales que, de acuerdo al nuevo poder, el país requería. No obstante, algo era indiscutible: se había afianzado una propuesta de continuidad del proyecto modernizador del capitalismo mexicano. Al nuevo poder le tocaba consolidarlo, limpiarlo de ambivalencias y constituirlo como un nuevo proyecto nacional.

Como toda coyuntura, la del 6 de julio del 2000 planteaba nuevas interrogantes. Una de ellas, central, era cómo

habría de sustituirse el viejo presidencialismo autoritario. De momento, lo importante era saber si los distintos actores políticos involucrados en el cambio tendrían la capacidad y la voluntad política suficientes para construir una nueva mayoría –en un contexto donde todas las fuerzas políticas eran minoría– dispuesta a discutir acuerdos orientados a la construcción de un nuevo régimen. El problema era complicado, en primer lugar, porque el 2 de julio Fox obtuvo apenas 40% de los votos. La Alianza por el Cambio no consiguió la mayoría de las cámaras. El PAN era gobierno en apenas media docena de estados, y no tenía una estructura de organización social que funcionara como canal de interlocución entre gobierno y sociedad. Además, sectores importantes de la sociedad civil –sindicatos, organismos empresariales, organizaciones campesinas y populares, ONG e, incluso, el alto y bajo clero– no participaron en la campaña foxista. En segundo lugar, porque no era fácil trabajar en la construcción de una nueva mayoría, cuando Vicente Fox había abrumado de promesas a la sociedad mexicana que, al menos en el terreno declarativo, impedían suavizar las viejas contradicciones establecidas entre actores políticos y sociales.

Bien puede calificarse la campaña de Fox como la campaña de las promesas desmesuradas, poco sustentadas y de escasa viabilidad. Promesas que continuó ofreciendo, no sólo como presidente electo, sino también como presidente en funciones. Tres de ellas destacan como emblemáticas de la irresponsabilidad y ligereza con la que fueron expuestas: crecer a tasas de 7%, generar un millón doscientos mil empleos anuales y resolver el conflicto chiapaneco en menos de quince minutos. Pero no menos importantes fueron sus promesas de reformar al Estado, elaborar una nueva Constitución, modernizar el funcionamiento del gobierno mexicano para convertirlo en un gobierno de calidad, desaparecer algunas secretarías de Estado, formar un gabinete paralelo, lograr el liderazgo mexicano en la firma del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), consolidar el protagonismo de México en los organismos internacionales, establecer una relación económica más intensa con la Unión Europea, e impulsar el proyecto regional llamado Plan Puebla-Panamá. Además de reemplazar a la Procuraduría General de la República por una Fiscalía Federal, concentrar a todas las policías en un solo organismo, modernizar al ejército mexicano, romper el papel hegemónico del Ejército sobre las Fuerzas Aéreas y la Armada, crear un ombudsman militar dependiente del Congreso de la Unión, asegurar la autonomía de la Procuraduría de Justicia Militar, modernizar la estructura orgánica

⁵² Este apartado se sustenta en lo principal en dos fuentes: una, Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero, *México: modernidad sin rumbo. 1982-2004*, UAM-A-Ediciones Eón, México, 2004, y Luis H. Méndez B. y Marco Antonio Leyva (coordinadores), *2000-2006. Reflexión acerca de un sexenio conflictivo*, UAM-A-Eón Editores, México, 2007, tres tomos.

de las fuerzas armadas, crear un cuerpo militar femenino, y desaparecer, o reestructurar, al Estado Mayor Presidencial. Y ni qué decir sobre el anuncio de la conformación de un equipo de gobierno plural y de transición tanto en lo político como en lo regional, así como la conformación del gabinete completo a más tardar en septiembre del 2000; dar a conocer, el primero de diciembre de ese año, el Programa de los 100 días, el Plan Nacional de Desarrollo y un Plan de 25 años que contendría la visión de largo plazo de su grupo gobernante. Y como olvidar las tan llevadas y traídas reformas estructurales —la energética, la laboral y la fiscal— que se constituyeron, más que en promesa, en obsesión, y a veces también en disculpa permanente ante los mexicanos por el no crecimiento económico y, en el extranjero, ante cualquier foro internacional, como propaganda para atraer capitales. En campaña, y como Presidente electo, Fox se comprometió a ajustar cuentas con el pasado y prometió crear una Comisión de la Verdad; tiempo después, instauró la Fiscalía especial para la investigación de movimientos sociales del pasado que, como toda fiscalía especial, hurgó, declaró, prometió y terminó por no resolver nada, incrementando el sentimiento de impotencia de la sociedad, así como los niveles de impunidad. También se comprometió a poner en la cárcel a los corruptos más significativos del país, a los que llamó “peces gordos”. A Alfonso Durazo, secretario particular del Presidente por más de tres años, le aseguró que su gobierno iría a fondo en el esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En el caso de las muertas de Ciudad Juárez, una y otra vez se pronunció en el sentido de que pronto se tendrán resueltos esos crímenes. En fin, promesas todas que, salvo excepciones, sólo desmejoraron su imagen ante la sociedad y ante las representaciones políticas⁵³.

Sin embargo, promesas más, promesas menos, no podrían hacer olvidar el hecho incuestionable de que Vicente Fox era el representante del poder en México, y eso era suficiente para cambiarle el perfil político al país. Para el PRI fue evidente el hecho. La derrota electoral lo puso al borde de la crisis. Sus primeras reacciones fueron de estupor y enojo, le siguió una larga catarsis colectiva que buscaba encontrar las razones del descalabro y, lo normal, se empeñaron también en encontrar culpables. Fue fácil ubicarlos: Ernesto Zedillo y Francisco Labastida. Pero esto, en realidad, en poco ayudaba a explicar lo acontecido, lo

entendieron y comenzaron a rascar más hondo: revisar la actualidad de sus documentos básicos, sus cotidianas prácticas de corrupción, su política de complicidades, el papel jugado por sus órganos de dirección, su estrategia de campaña, su posición ante el modelo económico y la reforma electoral, como posibles elementos explicativos de la debacle electoral.

Pero, antes que nada, el PRI tenía ante sí el enorme problema de aprender a moverse políticamente como oposición. Difícil tarea cuando se carece de experiencia al respecto. De momento, esos primeros meses bien pueden ser calificados de desastrosos: fueron derrotados en las cinco elecciones estatales programadas en lo que restaba del año. Se fortalecía la idea de todos aquellos que auguraban el desmoronamiento del PRI. El ex poderoso partido de Estado ya no contaba con la figura presidencial, con el jefe máximo del que dependían, en última instancia, las decisiones. El poder se desconcentró de golpe y con violencia. Se fragmentó y, en su dispersión, no tardaron en evidenciarse los nuevos espacios de poder, nuevos conflictos al interior del PRI tardarían todavía algunos años para restañar sus grietas y volver a ser electoralmente competitivo⁵⁴.

En cuanto al PRD, el otro polo importante de la oposición partidaria, le tocó vivir, al inicio del gobierno del cambio, una situación parecida, aunque menos intensa, que el PRI. Los resultados del 2 de julio sacudieron las conciencias de los militantes perredistas. No era para menos. En sólo tres años su perspectiva electoral se había modificado drásticamente. El panorama era totalmente distinto al que presenciaron en julio de 1997. Ya no era el partido que enarbolaba el cambio, había perdido más de un millón de votos con respecto a la anterior contienda electoral de carácter nacional, lo que prácticamente los colocaba con el mismo porcentaje de votación obtenido en 1994. Vivían un retroceso electoral de seis años.

El impacto en el perredismo fue brutal. Los saldos electorales del 2 de julio les plantearon enormes y variados retos. En medio de su crisis, debían resolver una diversidad de problemas que requerían de su atención inmediata. En primer lugar, y antes que nada, tratar de encontrar las razones y a los responsables de la derrota. Sin este primer paso, resultaba difícil iniciar un urgente proceso de reestructuración del partido: renovar sus liderazgos, readecuar su discurso a la nueva situación política del país, establecer

⁵³ Véase Miguel Ángel Romero M., “De rupturas, reacomodos y desafíos. La coyuntura del 2 de julio del 2000”, *El Cotidiano* núm. 103, septiembre-octubre, 2000.

⁵⁴ Véase Miguel Ángel Romero M. y Javier Gutiérrez R., “En busca de la hegemonía: el nuevo bloque en el poder”, *El Cotidiano* núm. 105, enero-febrero, 2001.

la forma de relación con Vicente Fox, el PAN y el PRI, como prerequisites básicos para enfrentar, con posibilidades de éxito, los procesos electorales en marcha

Dentro de las enormes divergencias existentes al interior del PRD, con respecto a los culpables de la derrota electoral, en un punto parecía existir consenso: gran parte de la culpa se debía a la actuación que habían tenido, y siguen teniendo, las corrientes políticas al interior del PRD. El costo político de esta situación era muy alto: imponían su voluntad, funcionaban como grupo de presión, impedían seleccionar a los mejores candidatos, alejaron del PRD a los intelectuales, académicos y miembros distinguidos de la sociedad civil, preocupándose sólo por obtener una cuota de candidaturas. La negociación con ellas le absorbía mucho tiempo y energía a la dirigencia nacional, tiempo y energía que pudieron haberse concentrado en el debate sobre los grandes problemas nacionales. Las propuestas para resolver el problema eran diversas; por desgracia para el partido, ninguna les ha funcionado, las corrientes políticas siguen actuando corporativamente en detrimento de la construcción de un partido moderno capaz de competir, con éxito, en el terreno electoral, pero, sobre todo, en perjuicio de la construcción de un proyecto alternativo de izquierda, preparado para romper con los estrechos límites en que se encierra la democracia mexicana.

Los resultados han sido, fueron y siguen siendo desastrosos, sus contradicciones internas, sus prácticas corruptas y sus indefiniciones políticas, pusieron al PRD en el camino de la peor de sus crisis. En 1999, se registró un descomunal fraude electoral realizado cuando se celebraban elecciones internas para elegir, entre otros cargos, a su Presidente Nacional. Cinco años después, en marzo del 2004, salió a flote la corrupción de militantes perredistas y miembros distinguidos del gobierno del Distrito Federal. A través de varios videos, intencionalmente transmitidos por la televisión nacional, la población se enteró que el responsable de manejar los dineros del gobierno del DF, el secretario de finanzas, era un jugador profesional que viajaba a Las Vegas en forma regular y gastaba miles de dólares en apuestas, propinas y diversos lujos. Que el operador político de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, recibía cientos de miles de pesos de parte de Carlos Ahumada, hasta entonces un empresario poco conocido, y que Carlos Imaz, delegado de Tlalpan y esposo de una cercana colaboradora del jefe de gobierno del DF, también formaba parte de la red de corrupción que había recibido dinero ilícito para invertirlo en campañas políticas. La crisis perredista tocaba fondo.

Nunca en su corta historia, el PRD se había visto obligado a enfrentar el descrédito público impulsado por una campaña mediática que tenía un claro objetivo: terminar con la popularidad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que, para ese entonces, contaba, según las encuestas de opinión, con más del 80% de las simpatías de la población para ser el próximo presidente de la República. El impacto de las imágenes grabadas fue brutal. Parecía que el PRD y todo lo que estuviera cerca de él se iba a ir al abismo del desprestigio, que la condena popular iba a enterrarlos en lo más profundo. Sin embargo, la respuesta política del partido fue eficiente. En poco tiempo, semanas, dos meses quizá, los papeles se habían invertido. López Obrador pasó de acusado a acusador. La teoría del complot se acreditó. En la conciencia popular quedó registrado que la corrupción perredista era evidente, de la misma forma que la trampa diseñada por los enemigos del jefe de gobierno para disminuirlo políticamente. De nueva cuenta, la impericia del gobierno del cambio no supo aprovechar una excepcional coyuntura en su camino al 2006. Y el movimiento perredista le complicó más su estrategia, al sacar a la calle a fines de agosto del 2004, a cerca de 400 mil personas, entre militantes y ciudadanos, para apoyar la figura de Andrés Manuel López Obrador⁵⁵.

En cuanto al Partido Acción Nacional, tampoco le fueron del todo bien las cosas. El mismo día de los comicios presidenciales, vivió la paradoja de perder ganando. Después de muchos años de perseverar, por fin resultó triunfador en la elección presidencial del 2000, pero, qué curioso, el mismo día fue derrotado por la pretenciosa actitud de su propio candidato, que personalizó la hazaña de vencer al PRI para, posteriormente, reducirle significativamente los espacios al PAN en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Las declaraciones emitidas y las decisiones tomadas por el candidato triunfador después del anuncio oficial de resultados no dejaron lugar a dudas: el equipo, el programa y la doctrina del gobierno del cambio serían foxistas y no panistas. El recurso de contratar agentes “caza talentos” para reclutar a los integrantes del nuevo gabinete, la redacción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo por parte de un equipo de especialistas, no necesariamente miembros de Acción Nacional, las primeras iniciativas de gobierno que se presentaron, no sólo sin consultar a los jefes del PAN, sino contrapunteado sus posturas, eran señales claras de

⁵⁵Véase Esperanza Palma y Rita Balderas, “El problema de las corrientes al interior del PRD”, *El Cotidiano* núm. 125, mayo-junio, 2004; y Rosa Albina Garavito, “El desafiador de AMLO, o cómo nuestra incipiente democracia estuvo en serio peligro”, *El Cotidiano* núm. 132, julio-agosto, 2005.

que el nuevo gobierno marcaría sus prioridades, su línea discursiva y, en general, todo su proyecto político, con la mayor independencia posible del partido que lo llevó al poder. La justificación de Vicente Fox fue que su gobierno era de transición, impulsado por una fuerza ciudadana que estaba más allá de los límites del blanquiazul y que, por tanto, requería del concurso de todos los mexicanos.

El lugar de los panistas fue ocupado, en parte, por un conjunto de representantes empresariales que conocían muy bien la forma de operar de sus consorcios, pero carecían de la mínima sensibilidad política para entender las diversas complejidades que requiere la conducción de las políticas públicas. Otra parte importante fue dispuesta para los “amigos de Fox” y algunos miembros destacados de las alianzas que se habían fraguado a lo largo de la campaña electoral, en especial la establecida con el llamado “Grupo San Ángel”. Hoy sabemos que su estrategia no prosperó. Mientras más avanzaba el sexenio, más disminuían su poder en el gabinete estos grupos emergentes. Sin embargo, en su reemplazo, tampoco tuvo mucho que ver el PAN, fueron sustituidos por personal que venía trabajando con Vicente Fox desde que era gobernador de Guanajuato⁵⁶.

El caso es que el reacomodo originado por la coyuntura del 2000 no le otorgó a ningún partido la hegemonía en el Congreso, aunque sí convirtió al PRI en el partido con mayor número de curules, pero sin posibilidad real de legislar con mayoría. En esta nueva correlación política de fuerzas, el trabajo legislativo tenía que orientarse a la construcción de nuevas mayorías a través de la negociación política, que hiciera posible el establecimiento de acuerdos a través de la elaboración de consensos. Al PAN se le dificultaba menos establecer acuerdos, siempre y cuando se aceptara su propuesta, porque se trataba, de alguna manera, de cambios estructurales que ellos venían demandando e impulsando con anterioridad. En el PRI, la situación era diferente. El poder estaba disperso, no existían posturas únicas, los liderazgos eran endeble y, sobre todo, no había acuerdo sobre cómo iba a ser la relación con el Ejecutivo, el caso del PRD fue más predecible: rechazaron, en lo general, cualquier tipo de reforma que se engarzara abiertamente con el modelo neoliberal.

Por su lado, el Ejecutivo contribuyó también, de manera destacada, a mantener una pésima relación con el Congreso. Lo hizo desde el primer día en que pisó el recinto legislativo

⁵⁶Véase Alejandro Carrillo, “Acostarse oposición y amanecer gobierno. El PAN en la era de Fox”, *El Cotidiano* núm. 115, septiembre-octubre, 2002, y Alberto Escamilla C. “Fox y Acción Nacional: la difícil relación”. *El Cotidiano* núm. 119, mayo-junio, 2003.

como presidente electo. En un acto altamente protocolario, Vicente Fox rompió con las formalidades establecidas en su primer discurso ante los representantes populares. Mezcló los rasgos más indeseables del populismo priísta con el culto a la personalidad, la añoranza del viejo porfirismo y la reivindicación ideológica de la derecha católica frente a la historia nacional. Causó molestias serias a los legisladores en sus frecuentes giras al exterior. Con extrema facilidad se comprometía a realizar los cambios estructurales que le demandaban los inversionistas extranjeros, a sabiendas que decisiones de ese tipo no dependían de él sino de la sensibilidad política de los congresistas para lograr acuerdos. Lo mismo sucedía cuando enviaba iniciativas de improviso que no pasaban por una discusión previa, informal, entre los legisladores. O cuando acusó al Congreso de ser responsable de la crisis económica o política del país, por no aprobar los cambios estructurales que impulsaba su gobierno. La relación fue difícil. No fueron pocas las ocasiones en que sus controversias tuvieron que ser dirimidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el final de su sexenio mantuvo una política de confrontación con el Legislativo.

Los resultados de su gestión no sólo fueron contundentes sino preocupantes: el crecimiento promedio anual durante su sexenio fue, al menos, diez veces menor que la meta prometida. Las consecuencias de esta falta de solvencia económica fueron múltiples: elevadas tasas de desempleo, incremento de la inseguridad pública, crecimiento de la economía informal, aumento de la migración hacia Estados Unidos, aumento de la violencia social, entre muchos otros aspectos⁵⁷.

En cuanto a las reformas estructurales, una y otra vez tuvo el Presidente que enfrentarse con una terca realidad: el no contar con el suficiente apoyo en las dos Cámaras para llevarlas adelante de la manera que, suponía, era la más adecuada: la privatización. Ante esta evidencia, una sola respuesta: culpar a las diversas fuerzas políticas mayoritarias de ser las responsables de que nuestro país no contara con condiciones estructurales que lo hicieran competitivo en el mundo.

Respecto al compromiso adquirido en su lucha contra la corrupción, de atacar frontalmente a los peces grandes, no se fue más allá de las palabras. El caso del “Pemexgate” es bastante ilustrativo al respecto. Hasta el día de hoy, ningún acusado de tan vergonzoso ilícito se encuentra en prisión. Lo mismo ocurrió con el lavado de dinero que realizaron los

⁵⁷Véase Marco Antonio González, “Resultados de la política económica del gobierno foxista”, *El Cotidiano* núm. 127, septiembre-octubre, 2004.

“Amigos de Fox” para apoyar la larga campaña realizada por el primer mandatario del país. En el imaginario social quedó la impresión de un pacto encubridor entre el gobierno y el PRI, para enmascarar la ilegalidad de sus actos políticos. Desde este sexenio hasta el día de hoy, los mexicanos nunca habían sentido y sufrido con tanta intensidad ese destructivo cáncer social que se llama impunidad.

La imagen presidencial se deterioró, el proyecto del cambio quedó en entredicho y los costos políticos no se hicieron esperar. Si algo dejaron en claro las elecciones intermedias del 2003, fue una sentida derrota del partido en el poder. El PAN fue el partido que mayores pérdidas tuvo. En el 2000 contaba con 207 diputados, a partir del 2003 sólo contó con 153. Perdió 54 diputaciones. El electorado lo castigó. O el voto de castigo fue para Vicente Fox y el que pagó fue el PAN. Fue tan claro este voto de condena al panismo que solamente en cuatro entidades superaron el porcentaje de votación que habían logrado en el 2000. O, dicho de otra manera, en 28 entidades obtuvieron un porcentaje de votos menor al que se había alcanzado tres años antes. Pero la evidencia más inquietante de este momento electoral, para el gobierno y los partidos políticos, la constituyó, sin duda, el alto índice de abstencionismo registrado. El ciudadano, desde la soledad de su voto, manifestó su desconfianza, o su repudio, a todos aquellos que los gobiernan, y a todos aquellos que decían representarlos⁵⁸.

El proceso electoral había sido, en lo general, legal y creíble. Nuestra democracia procedimental funcionó adecuadamente a través de sus instituciones. Sin embargo, el ciudadano, de manera individual u organizada, comenzó a adquirir conciencia de que la democracia electoral, tan festejada desde la autoridad, de poco o nada servía para combatir el deterioro económico, la falta de empleo, el empeoramiento de los niveles de vida de la población, el aumento en los niveles de pobreza, o la tan retorcida forma como se imparte la justicia en México. Más aun, no alcanzaba siquiera a garantizar la estabilidad política de la nación.

En este contexto, la movilización social se hizo más virulenta. Los contingentes magisteriales, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, seguían movilizándose, lo mismo que el movimiento de El Barzón; los movimientos populares continuaban su lucha, los sectores marginados que integran la economía informal, continuaban dando fuertes dolores de cabeza a la autoridad gubernamental; el movimiento de Atenco, todavía antes de

la represión, fue más allá de los motivos originales de su lucha, para combatir ahora por la autonomía municipal⁵⁹; para fines de sexenio, la confluencia de movimientos sociales en Oaxaca, organizados en la APPO, y la feroz represión del gobierno estatal con la complacencia del gobierno federal y la indiferencia de senadores y diputados en el Congreso de la Unión⁶⁰, y lo más sorprendente, las organizaciones sindicales independientes, violentamente obligadas a concertar acuerdos que favorecieran la nueva lógica de la calidad total, prácticamente inmovilizadas en este tiempo convulsionado que vivía el país, volvieron a salir a la calle, a hacer oír su voz, y manifestar su repudio a la decisión adoptada por el gobierno foxista de, por un lado, privatizar la industria eléctrica y petrolera y, por el otro, violentar los contratos colectivos de las grandes empresas paraestatales, en aras de una supuesta urgencia de reconvertir estructuralmente estos sectores industriales prioritarios, so pena de continuar con el estancamiento de la economía.

Pero todo lo antes dicho en relación a la respuesta social durante el gobierno del cambio quedaría necesariamente inconcluso si obviáramos la lucha zapatista. Muchos acontecimientos pueden explicar el descontento social durante el gobierno del cambio, pero pocos como el registrado por el EZLN en los primeros meses del 2001. Los zapatistas tomaron en serio la promesa gubernamental de resolver el conflicto indígena. El problema era simple, la solución compleja. Se trataba de sancionar constitucionalmente una nueva ley indígena sustentada en los Acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y los representantes del gobierno federal, durante el mandato de Ernesto Zedillo. Con este objetivo, los zapatistas decidieron realizar una marcha, de la Selva Lacandona al Distrito Federal, visitando en el camino algunas de las zonas indígenas más pobladas y representativas del país. La entrada a la ciudad de México no pudo ser más impactante. La ruta que siguieron fue la misma que, en 1914, recorrieron Emiliano Zapata y su Ejército Libertador del Sur: de Xochimilco a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. A pesar de que no se conocía el recorrido con anticipación, miles y miles de capitalinos salieron a las calles en multitudinaria muestra de apoyo. El número de participantes, según cálculos extraoficiales, fue de 500 mil a lo largo del recorrido y 350 mil más durante el mitin realizado al final de la peregrinación.

⁵⁹Véase Frente de Lucha en Defensa de la Tierra, “La lucha de Atenco, un derecho universal”, *El Cotidiano* núm. 150, julio-agosto, 2008.

⁶⁰Véase el núm. 148 de *El Cotidiano, Oaxaca: crisis política y represión*, marzo-abril, 2008.

⁵⁸ Respecto al proceso electoral del 2003, véase *El Cotidiano* núm. 122, *Elecciones intermedias*, noviembre-diciembre, 2003.

El primer objetivo había sido cumplido a cabalidad. De acuerdo a los resultados de algunas encuestas publicadas en esa oportunidad, la población que decía simpatizar o estar de acuerdo con que se legislaran los derechos y la cultura indígena era de un porcentaje cercano al cien por ciento, y quienes demandaban que esa legislación fuera la propuesta que elaboró la COCOPA, oscilaba alrededor del ochenta por ciento. Sin embargo, el cumplimiento del segundo objetivo, ser aceptados y escuchados en el Congreso de la Unión, entrañaba muchas más dificultades. La llegada al recinto legislativo no fue fácil. Se vivieron circunstancias de áspero debate que amenazaron con romper un inestable diálogo. Hubo momentos de tensión que estuvieron a punto de generar una fractura irreversible. El tema de la comparecencia o no de los indígenas en el recinto legislativo obligó a que los diferentes actores políticos manifestaran un punto de vista que se particularizó mucho más allá de lo políticamente deseable. Los partidos políticos mostraron diferencias sustanciales, tanto en su interior como en su relación recíproca. El PAN expresó discrepancias profundas con el gobierno foxista. Se desataron verdaderas batallas internas en las organizaciones políticas por ganar ciertas mayorías y, a fin de cuentas, se transparentaron, sin quererlo y mucho menos desearlo, las poco democráticas formas de comportamiento político de nuestros representantes populares. Al final, después de una apretada votación, se aceptó que los integrantes del EZLN hicieran escuchar su voz ante la máxima tribuna política de la nación. Había ganado la postura de legislar a favor de los derechos y la cultura indígenas. Los zapatistas lograron convencer y sumar apoyos importantes a su causa. En forma sorpresiva, al terminar la presentación, la clase política de este país se volcó en halagos, reconocimientos y adhesiones a las justas demandas de los indígenas. Súbitamente, dirigentes de partidos de oposición, gobernadores, militantes, senadores y diputados panistas descubrieron su simpatía con las demandas indígenas. Había concluido la exitosa gira del EZLN a la ciudad de México, pero quedaba claro que la batalla aún no la habían ganado los indígenas. Existía consenso sobre la necesidad de legislar a favor de los derechos y cultura indígena, pero no lo había sobre el tipo de legislación que habría de realizarse. De inmediato saltaron a la palestra dos posiciones claramente enfrentadas. La primera sostenía que más valía una ley imperfecta (la propuesta de la COCOPA) pero que contara con el aval del Ejército Zapatista, que una ley impecable, legislativamente hablando, que se aprobara sin su consentimiento. Por otro lado, un grupo de legisladores aseguraba que ellos no estaban para resolver conflictos

sino para legislar y hacerlo bien. Se negaron a aprobar la iniciativa de la COCOPA y sostenían que de ninguna manera iban a permitir chantajes. Al final de la discusión, triunfó la propuesta conservadora: se legisló sin tomar en cuenta a los zapatistas, ni a los grandes sectores de la sociedad que los apoyaban. Con esta decisión todos perdieron: Vicente Fox no pudo lograr la aprobación de una ley que le permitiera reanudar el diálogo con el EZLN. El PRI perdió la oportunidad de acreditarse como una oposición creativa. El PRD se desacreditó como opción de izquierda: dividido, sin rumbo, sin propuestas propias terminó votando en el Senado por la postura conservadora. El EZLN también perdió la posibilidad de incrementar su peso político y moral ante la sociedad, pero, cómo olvidarlo, los grandes perdedores fueron todos los integrantes de las comunidades indígenas en el país. Una vez más, se postergó la ancestral deuda que la nación tiene con ellos.

Con todo lo antes dicho, no es difícil advertir cómo, de nueva cuenta, la sociedad política excluyó a la sociedad civil. El rumbo de la nación se depositó en el aparato de Estado, en los partidos políticos y en la fantasía de que nuestra flamante democracia nos hiciera el milagro de reconciliar lo irreconciliable. La historia nacional comenzó a escribirse desde los partidos políticos: desde su atraso, desde su falta de compromiso con la nación, desde sus rezagadas, interesadas y corruptas formas de luchar por el poder. Y también desde los medios de comunicación que, al transformar la noticia en mercancía, insistían, de manera compulsiva, en desaparecer el pasado y quitarle significado al futuro, para eternizarnos en un alargadísimo presente, modelado a su antojo todos los días y sin más guía que lo inmediato.

Y lo peor de esta historia, nuestra historia, es que, después de 20 años, seguíamos sufriendo las consecuencias de un largo proceso de confusión económica, de atraso político, de indefinición ideológica y de maltrecha identidad nacional. Seguíamos atrapados en el fango de la ambivalencia. Eso sí, dentro de una lograda democracia electoral que muy pronto habría de ponerse en duda. La coyuntura del 2000 no logró tampoco terminar con el carácter híbrido del Estado mexicano, continuábamos entretenidos en no ser ni una cosa ni la otra, ni neoliberales ni nacionalistas, para terminar simulando una modernidad, sustentada en el libre mercado, donde era útil jugar a ser populista, necesario fomentar la impunidad, la corrupción, e históricamente placentero, el autoritario ejercicio del poder. Cómo conciliar el populismo foxista de sus promesas de campaña, de candidato electo y de presidente en funciones, con su fundamentalismo neoliberal; cómo dar cuenta de la oscura permanencia de

los viejos esquemas de dominación para cumplir con los nuevos esquemas globalizadores; cómo ignorar el todavía frecuente uso corporativo de la fuerza de trabajo para funcionar en modelos de calidad total; cómo entretenernos con la democracia y ejercer todo tipo de poderes ocultos; cómo ser neoliberal en una partidocracia que heredó, entre otras cosas, los atributos metaconstitucionales del viejo presidencialismo mexicano.

Estas eran sólo algunas de las muchas contradicciones que nos tenían atrapados en la etapa liminal de un nacional rito de paso que no acaba por resolverse.

La coyuntura del 2 de julio del 2006: la ilegítima legalidad de un triunfo electoral

En este contexto, un nuevo acontecimiento político, sucedido todavía durante el gobierno foxista y propio del gran periodo inconcluso que vive el país desde 1983, nos sugirió, ahora en el 2004, que un nuevo tiempo de coyuntura se estaba construyendo. Un suceso distintivo de nuestro tiempo incierto, contingente y riesgoso —el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento Jefe de Gobierno del Distrito Federal— puso en estado de alerta a la sociedad política y a sectores importantes de la sociedad civil. Intuimos que, de este conflictivo proceso de lucha política, podría derivar una nueva coyuntura, otro momento privilegiado de nuestra historia, otra posible ruptura que, al igual que las cuatro anteriores, pugnaría seguramente por cerrar el largo e inquietante periodo de ambigüedad política que vivimos desde 1983. Una coyuntura que volvería a plantearse lo que se planteó la primera: realizar una contundente reforma del Estado, políticamente autorizada para formular el perfil del nuevo proyecto nacional. Una coyuntura que, al proponerse terminar con el carácter híbrido de nuestras instituciones, lograra por fin iniciar el proceso de definición política, económica, social y cultural del país, y así poder incursionar, con mayores posibilidades de éxito, en las intrincadas redes del mundo global.

Desde luego, la coyuntura que podría iniciar este nuevo tiempo, no garantizaba por sí misma el cumplimiento de sus promesas. No podemos olvidar el carácter de posibilidad que toda coyuntura contiene; por tanto, teníamos que lidiar también con el hecho, igualmente posible, de que los resultados de la nueva lucha política por el poder, podrían terminar desdibujando incluso más nuestras identidades o, lo que sería peor, el nuevo enfrentamiento entre los actores políticos podría convocar al nunca suficientemente exorcizado fantasma de la crisis económica y a sus catas-

tróficas consecuencias para la sociedad en su conjunto, y ni qué decir sobre la viabilidad de que nuestro largo periodo se resolviera con la imposición de un Estado autoritario disfrazado de democracia.

En realidad, más allá del hecho cierto de que iniciaba un tiempo de coyuntura, uno no podía sino imaginar en ese momento posibilidades sobre la forma en que se resolvería cuando se hiciera presente. Se nos ocurrieron cuatro escenarios posibles: la reforma del Estado y el impulso a la consolidación de una democracia procedimental; la reforma del Estado y el impulso a una democracia con más sentido social; la reforma del Estado retomando su carácter autoritario pero sin perder la investidura de democracia, o la nada lejana posibilidad de continuar con un Estado ambiguo y ambivalente de instituciones híbridas proclive a ser integrado cada vez más formalmente a Estados Unidos. Por supuesto, en los cuatro escenarios posibles, existía una constante: el respeto a las reglas señaladas por el orden mundial globalizado. En los cuatro casos, vale la pena dejarlo asentado, el compromiso con la globalidad estaba asegurado con la responsabilidad de cualquier fuerza política por mantener la disciplina fiscal, la salud de las variables macroeconómicas y el impulso a la sociedad de libre mercado (competencia, productividad, flexibilidad laboral). Ninguna de las fuerzas políticas en competencia, incluyendo las llamadas fuerzas de izquierda inscritas en el PRD, habría de plantearse un cambio en dirección contraria. La izquierda partidaria había reducido su espectro ideológico a la recuperación parcial de los elementos de política social propios del Estado Benefactor. Su estrategia política adoptó muchos de los contenidos de la socialdemocracia europea en los llamados “Años Dorados”⁶¹.

Esta era, en lo general, la situación política que creó lo que en su momento llamamos un nuevo tiempo de coyuntura. Un representante de esta izquierda partidaria, Andrés Manuel López Obrador, jefe entonces del gobierno del Distrito Federal, había adquirido una fuerza política de tal magnitud que, faltando más de dos años para las elecciones presidenciales, fuera de tiempos electorales y sin siquiera ser considerado todavía como el candidato de su partido, el PRD, era reconocido ya, en diferentes arenas políticas, como el personaje político con mayores posibilidades de alcanzar la primera magistratura de la nación.

Respondiendo fielmente a los principios básicos de la cultura política mexicana, sus adversarios decidieron, a

⁶¹ Término tomado de Eric Hobsbawm, *Historia del Siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2003, véase cap. IX, “Los años dorados”, pp. 260-289.

partir de este momento, eliminarlo a como diera lugar de la contienda electoral. Se inicia una guerra sucia al interior de la clase política que, antidemocrática por principio, se impuso como la principal estrategia de campaña electoral y no electoral para deshacerse del adversario incómodo de la izquierda partidaria. El gobierno de la República, su partido, el PAN, y los todavía dueños de la mayor parte del poder político, el PRI —a veces aliados, a veces por separado— se propusieron exterminar a su adversario perredista de la lucha por la presidencia de la República.

A pesar de las nuevas instituciones democráticas, puestas a prueba, con éxito, en la elección presidencial del año 2000, la política partidaria mostró nuevamente su atávico rostro: no se trataba de competir democráticamente en un marco de igualdad y orden, tampoco se pretendía negociar, crear acuerdos o conciliar entre adversarios proyectos de acción política beneficiosos para el país; no, el objetivo fue el de siempre: anular al contrincante de cualquier manera, a cualquier precio —y con violencia. En este caso al más fuerte, Andrés Manuel López Obrador, portador de un proyecto que amenazaba con invalidar los enormes privilegios adquiridos por un cada vez más pequeño grupo de empresarios que, en un acelerado proceso de concentración de la riqueza, habían empobrecido al país y a sus moradores.

El primer acto realizado con esta intención, que aquí consideramos como el inicio de un nuevo tiempo de coyuntura, lo constituyó el desafuero de López Obrador para poder ser juzgado por la autoridad competente por una supuesta desobediencia a la sentencia de un juez de amparo. Un proceso legal de escasa importancia en otros momentos sociales, se convirtió en una descarnada lucha sin cuartel entre los partidos políticos con la interesada intervención del gobierno federal y la acción cómplice del poder judicial.

Después de largos meses de encrespada lucha, de deshonrosos, inconvenientes y frecuentemente torpes ataques contra el gobierno del Distrito Federal y su representante legítimamente electo, la Cámara de Diputados decidió, por mayoría, construida por consigna partidaria, desafuero a Andrés Manuel López Obrador. “El Gobierno del Cambio” descabezó a la “Ciudad de la Esperanza”. “¡Es un simple acto jurídico orientado a hacer cumplir la ley! ¡No podemos olvidar que vivimos en un estado de derecho! ¡Nadie por encima de la Constitución!”, se nos hizo saber repetidamente en diversos tonos, espacios y tiempos. Sin embargo, en esta nuestra democracia imperfecta, la “responsable” disposición al cumplimiento del orden jurídico de la que tanto nos habló la autoridad en el proceso de

desafuero, mostró en realidad cómo el poder en turno, con el incondicional apoyo de las dirigencias partidarias del PRI y del PAN, se impuso, a costa de lo que fuera, sobre la voluntad de parte importante de la ciudadanía que, en ese momento, mostraba mayoritariamente su inclinación hacia la solución planteada por la izquierda perredista para enfrentar los desafíos, desde 1983 sin solución, que enfrentaba el país.

El recién iniciado tiempo de coyuntura surgía de un conjunto de conflictos políticos, muchos de ellos intencionadamente no resueltos, que nos revelaban una inquietante posibilidad: el afianzamiento del carácter autoritario de un régimen todavía en formación; sin embargo, este proceso de endurecimiento autoritario desde la sociedad política, develaba también otra posibilidad: que la enorme fuerza emergida de una movilización social sin precedentes obligara a la clase política mexicana a llegar a acuerdos mínimos que permitieran no sólo una transmisión pacífica de poderes en el 2006, sino que facilitara también la construcción de un gran pacto social que ayudara a desenredar el embrollo político que había impedido la reforma del Estado, el afianzamiento de un régimen; en consecuencia, la credibilidad en las instituciones, el fin de un largo periodo de vacío político, de ingobernabilidad. La gran posibilidad: que nuestra embrionaria democracia procedimental comenzara a incursionar en los hasta hoy prohibidos espacios de la sociedad y la economía.

De momento, la decisión presidencial de retirar cargos en contra del Jefe de Gobierno del DF —bastante populista por cierto al pasar, como en los viejos tiempos del presidencialismo autoritario, por encima de una decisión que por mayoría había tomado el Congreso— logró distender un conflicto político que amenazaba con desbordar los frágiles límites legales de un endeble orden en formación. Sin embargo, contrariando la mediática campaña oficial y la insípida reunión entre los dos contrincantes políticos (Vicente Fox y López Obrador), la autoritaria disposición de un presidencialismo encubierto, no garantizaba que terminara la embestida en contra de un candidato y un proyecto de izquierda partidaria con posibilidades de triunfo en las elecciones presidenciales del 2006. Resultaba evidente que la derecha, política y social, el PRI del descompuesto nacionalismo revolucionario, y poderosos grupos empresariales involucrados en confusas, y presuntamente ilegales, operaciones financieras a través del Fobaproa, no habrían de detenerse en sus propósitos por la decisión del Ejecutivo Federal.

El conflicto tomó otros derroteros, los de la guerra sucia, en una confrontación que habría de ver rebasados

los ya de por sí estrechos límites de nuestra democracia. En los siguientes meses fuimos testigos de una despiadada lucha por el poder donde el objetivo habría de centrarse en la eliminación del adversario con posibilidades. No asistiríamos a un encuentro de ideas, a una discusión de proyectos o programas a ser difundidos y discutidos por los diversos contrincantes políticos en las diferentes arenas, para, después, ser electoralmente sancionados por el voto ciudadano; no: la intención fue aniquilar, más que el proyecto, la figura del que desde el inicio del tiempo de coyuntura mostró la sensibilidad política y el apoyo popular suficiente para crear el ansiado –y desde hace más de veinte años ausente– proyecto de nación que prometía suavizar, en beneficio de la mayoría de mexicanos, nuestro accidentado camino por el mundo global.

El intento de desafuero de López Obrador habría de ser devorado, en apariencia, por la voráGINE de sucesos que a partir de entonces inquietaron a la sociedad y enfermaron más a sus débiles instituciones, haciéndonos sentir y creer que la vida política nacional perdía rumbo y sentido. Sin embargo, reiteramos, de este hecho parte el tiempo de coyuntura que habría de desembocar en un nuevo e inquietante momento de nuestra historia, una nueva posibilidad de ruptura y recomposición política, pero ahora, como nunca, acompañada de una irritante y agresiva significación: la desconfianza⁶².

La respuesta política, se pensaba, al enfrentamiento programático de los tres principales partidos políticos la daría el resultado electoral del 2 de julio. Se imaginó que el voto ciudadano, protegido por las instituciones electorales (IFE, Cofipe y tribunal electoral) decidiría el rumbo del país. Por desgracia no fue así. Después de 6 meses de una desquiciante contienda electoral, antecedida de largas y alteradas semanas de batalla preelectoral, y de casi tres años de intensa –y frecuentemente antidemocrática– lucha política partidaria en torno a la disputa por la presidencia de la República, el gobierno foxista, los partidos políticos, la ciudadanía y las instituciones electorales, arribaron al 2 de julio en una atmósfera de desconfianza y políticamente

⁶²Vale aclarar que cuando hablamos del inicio del tiempo de coyuntura, nos referimos no a una fecha en específico, sino al periodo que comienza en mayo del 2004 y concluye con la renuncia del Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha el 27 de abril del 2005. Doce meses de agitación política y social generados por el proceso de desafuero al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Para conocer los detalles al respecto, se puede revisar, además de la prensa, los artículos que al respecto publica el núm. 132 de la revista *El Cotidiano*, julio-agosto, 2005, DCSH-UAM-A, y el libro de Alejandra Lajous, *AMLO: entre la atracción y el temor. Una crónica del 2003 al 2005*, Océano, México, 2006.

maltrechos. No era para menos: desde los turbadores meses del *desafuero*, el ambiente político nacional, ya de por sí descompuesto, arreció su proceso de enrarecimiento. Varios hechos, entremezclados, terminaron por pervertirlo. Cómo no recordar la preocupante debilidad –¿o parcialidad?– del Instituto Federal Electoral después de la autoritaria designación, en el 2003, de los nuevos consejeros electorales y de su presidente, a partir de un acuerdo arbitrariamente decidido e impuesto por el PRI y el PAN ignorando al resto de las fuerzas políticas, en especial al PRD; y qué decir de la confusa actuación, por mencionar lo menos, de este mismo Instituto durante los meses de la contienda electoral, ni cómo olvidar la militante –por tanto caprichosa, injustificada e insostenible– intromisión del Ejecutivo Federal y de su aparato para favorecer una particular orientación política, la de su partido, ignorando sus obligaciones como jefe de Estado; cómo no hablar de los descompuestos comportamientos de los partidos políticos, que con harta frecuencia, ignoraron los mandatos de la normatividad electoral vigente, o sus desleales pugnas internas y externas con demasiada frecuencia señaladas por la corrupción, o su compulsiva determinación por eliminar al adversario antes que dialogar con él; cómo dejar de hacer alusión a la ilegal, despótica y parcial injerencia de ciertos sectores sociales, como los empresarios de la televisión, la Iglesia Católica o, en general, los poderosos señores del dinero, transformados a lo largo del proceso en poderosos grupos de presión política a favor de la orientación de derecha representada por el PAN, todo esto en un desfavorable entorno señalado por la ambigüedad y la ambivalencia, por un vacío político que hizo cada vez más frecuentes los momentos de ingobernabilidad en el país. En suma, la elección presidencial del 2006 y sus inquietantes consecuencias, fueron el reflejo de la incapacidad de una clase política que, desde 1983, se propuso, obviamente sin conseguirlo, reformar al Estado, crear un nuevo pacto social e inaugurar un nuevo proyecto nacional para enfrentar los retos que le planteaba, al nuevo tiempo mexicano, el mundo global.

Es este conflictivo y desaseado proceso político, que creó un frágil entorno para el ejercicio de la democracia electoral, donde ubicamos cualquier tipo de explicación a la elección del 2 de julio del 2006. Y es al llegar a este momento culminante que tuvimos que preguntarnos si el tiempo de coyuntura, tal como lo habíamos imaginado, terminó creando, con estas elecciones, una nueva posibilidad de transformación política en el país, o si, por el contrario, seguiríamos soportando las preocupantes inercias de un orden en construcción. Hoy sabemos que, después

de lo mucho que la realidad nos ha mostrado, no resulta aventurada la hipótesis del continuismo: pensamos el 2 de julio del 2006 como una coyuntura más —la quinta en 24 años— que se frustra.

La elección reveló un hecho inédito que, por sí mismo, explica, al menos formalmente, el beligerante rumbo que tomó la disputa política después del día de la elección: por primera vez en la historia reciente del país, los resultados no dieron un claro ganador de la contienda, situación que, aunada al ambiente de desconfianza prevaleciente en el ámbito político y extendido ya al ámbito social, hizo del proceso postelectoral un tiempo de incertidumbre donde privó el rumor y la especulación; tiempo contingente, tiempo riesgoso, que transportó nuestro imaginario a aquel no tan lejano episodio del fraude electoral en 1988. Por supuesto, ni fueron las mismas circunstancias políticas ni eran iguales las fuerzas sociales que en este momento se medían, pero, como buen imaginario, registró de inmediato la huella del fraude en una gran parte de la población⁶³.

Varios fueron los acontecimientos que favorecieron la creación de un imaginario de fraude entre la ciudadanía, y bien podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el origen inmediato lo encontramos en el errático comportamiento de las instituciones electorales y de las grandes lagunas que mostró el Código Federal Electoral para dar respuesta legal y sanción oportuna al sinfín de irregularidades que mostró la contienda electoral. La incapacidad de la autoridad electoral —¿o el temor? ¿o la complicidad?— para castigar la guerra sucia del Partido Acción Nacional en contra de la oposición de izquierda⁶⁴, o la ilegal intromisión del

⁶³ Imaginario no es igual a representación falsa o equivocada de la existencia, es una construcción simbólica particular a través de la cual se explica la realidad o parte de ella. Es abundante la bibliografía al respecto, citamos aquí un texto ampliamente reconocido por los estudiosos del tema: Cornelius Castoriadis, *La institución imaginaria de la sociedad*, Tusquets, Barcelona, 1983.

⁶⁴ Hablar de la guerra sucia del Partido Acción Nacional es sólo un eufemismo, resulta más claro bautizarla como una guerra del miedo, técnica, política y financieramente planeada por este instituto político, que se plasmó en un conjunto de acciones orientadas —pensamos que con éxito— a cambiar la intención del voto de parte importante de la población que sufragó. Es fácil reconstruir esta historia, basta revisar la prensa nacional, recordar los spots publicitarios del PAN por la televisión, o simplemente traer a la memoria los miles y miles de mensajes que se difundieron a nivel empresa, iglesia o telefónico a lo largo y ancho del país, para ubicar el daño que este tipo de acciones le causó no sólo a su contrincante y a su partido, sino principalmente a nuestra frágil democracia. Andrés Manuel López Obrador, se difundió, era un peligro para México, se recomendaba no votar por un candidato que “te va a quitar tu casa”, “que te va a dejar sin empleo”, que estaba relacionado con los grupos armados en el país, que mantenía una alianza desestabilizadora con el presidente de Venezuela, etc., etc., etc.

Ejecutivo Federal a favor de su partido, o la mal intencionada —y por supuesto también delictiva— ingerencia de poderosos sectores de la sociedad civil, como las cúpulas del empresariado nacional, la alta jerarquía de la Iglesia Católica o los medios electrónicos y gran parte de los medios impresos para impedir el avance de la oposición de izquierda, o la bien ideada acción del Partido Nueva Alianza (Panal) para jugar a favor del candidato panista⁶⁵, acompañado todo esto de un largísimo tiempo histórico —1810-2006— que creó y fortaleció entre los mexicanos una poderosa cultura de la desconfianza, hizo que, cuando en la noche del 2 de julio el Instituto Federal Electoral y las empresas encuestadoras anunciaran su decisión de no hacer públicos los resultados electorales por lo cerrado de la competencia presidencial, el fantasma del fraude se instalara en las mentes de una gran mayoría de ciudadanos votantes.

El candidato del PAN se declaró de inmediato vencedor, el del PRD —¿por qué quedarse atrás?— realizó la misma acción ilegal, y el IFE, ante el incierto y amenazante entorno político, dejó que hablara por él el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero sin hacer del conocimiento público la existencia de un archivo especial que concentraba el cúmulo de actas con inconsistencias que había arrojado el proceso. Al final, los resultados del PREP oficializaron el apretado resultado entre PAN y PRD —poco más de medio punto porcentual— y el Presidente del IFE, contraviniendo la ley, declaró vencedor al candidato del PAN y, poco después, cuando las fuerzas perredistas denunciaron el ocultamiento por parte del IFE del archivo de inconsistencias, se acaloró el sentimiento de sospecha, y la suspicacia y el recelo político congelaron cualquier

⁶⁵ La existencia y los comportamientos político-electorales del Panal, antes, durante y después del proceso electoral, son un ejemplo fehaciente del carácter anfíbológico de la realidad mexicana actual. Surge de la fuerza política-corporativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en otro tiempo bastión importante del orden nacionalista-revolucionario a lo largo de los gobiernos priístas. Producto de pugnas internas —prácticamente desde el inicio del sexenio actual— entre la dirigencia sindical —emblemáticamente representada por su líder “moral” la maestra Elba Esther Gordillo— y el desarticulado PRI, representado por Roberto Madrazo posteriormente candidato de su partido a la presidencia de la República, la autoritaria señora de los destinos del SNTE inicia un acercamiento con el gobierno foxista —neoliberal— que terminará rompiendo el pacto corporativo con el PRI, para iniciar una nueva alianza, igualmente corporativa con el PAN, que culminará con la formación del Panal. La estrategia electoral fue clara y determinante: gran parte de los integrantes del nuevo partido, casi todos maestros, votaron corporativamente, por un lado, por sus candidatos a diputados y senadores, por el otro, por el candidato del PAN para presidente. En una elección tan cerrada, estos votos fueron definitivos. El candidato panista le debe en gran medida la presidencia a este partido, y se lo van a cobrar.

posibilidad de diálogo entre las fuerzas enfrentadas. La idea de fraude se instaló en las fuerzas opositoras de izquierda, y la enorme movilización social que generó la demanda política de *voto por voto casilla por casilla* mostró, para los presuntos ganadores, amenazantes atisbos de una violencia social que nunca se dio⁶⁶.

En este ambiente político descompuesto, no resultó para nada extraño la propuesta del IFE de contar las actas para certificar los resultados del PREP, aunque nada extraño resultó tampoco el resultado que confirmaba lo que ya antes había declarado el IFE: el apretado —¿planeado?— triunfo del candidato del PAN. La desconfianza se impuso a la oposición partidaria y en las redes ciudadanas se acrecentó la sospecha y subió de tono la irritación. Sólo quedaba ya la voz del Tribunal Federal Electoral para salvar la credibilidad de las instituciones democráticas, y esa voz autorizada terminó por ahondar el escepticismo de buena parte de los mexicanos en la recuperación de nuestra enfermiza democracia.

En efecto, después de agitadas semanas de confrontación política e inusual movilización social, el Tribunal Federal Electoral emitió su fallo⁶⁷: calificó como válida la elección presidencial y declaró a Felipe Calderón Hinojosa presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 30

⁶⁶ Fue monumental y enormemente llamativa la respuesta ciudadana organizada por el equipo de AMLO con el apoyo del PRD en la lucha postelectoral. Cuatro marchas que, por la enorme cantidad de asistentes, terminaron por transformarse en enormes plantones que cubrían todo el Centro Histórico, la Alameda Central por Av. Juárez y buena parte de Reforma, en una ocasión, hasta el Museo de Antropología. Entre uno y tres millones de manifestantes corearon hasta el agotamiento la consigna que los había llevado a la calle en un inusual acto de identificación colectiva: *voto por voto y casilla por casilla*, y no fueron escuchados. Al reclamo ciudadano, oídos sordos. Ni los actores políticos, a excepción del PRD, ni la autoridad electoral, tomaron en cuenta la voz de los de abajo. Ante la cerrazón, el movimiento social se radicalizó, y, sin sobrepasar la lucha pacífica, se constituyó en plantón permanente, y el día 16 de septiembre, en Convención Nacional Democrática. La respuesta fue más que evidente: una gran parte de la población decidió no reconocer el triunfo del candidato panista a la presidencia de la República. Fue interesante advertir la cualidad de la movilización social. Por siempre, la movilización social en México mostraba su cariz corporativo. Eran las organizaciones sociales, campesinas y sindicales las que marchaban; ahora, por primera vez, predominó el ciudadano. De las grandes pancartas grupales a la denuncia individual a través de carteles improvisados. El movimiento corporativo en México comenzó a transformarse en movimiento social. Para advertir las diferencias entre uno y otro desde una perspectiva teórica, revisar los números 28 y 29 de la *Revista Sociológica*, UAM-A, 1995, dedicados a los movimientos sociales desde diferentes perspectivas de análisis sociológico.

⁶⁷ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, *La Calificación Presidencial*, véase la prensa nacional en la última semana de agosto para revisar el documento y su impacto político.

de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 99 párrafo cuarto fracción segunda de la Constitución. Y en cuanto a las impugnaciones sobre un conjunto de irregularidades al proceso electoral presentadas por la Coalición por el Bien de Todos, el tribunal estimó que, si bien muchas de ellas fueron contrarias a la ley, no podía calcularse el impacto sobre la elección. La difusión, consideró, de mensajes emitidos a través de los medios electrónicos e impresos por las fuerzas partidarias y por fuerzas sociales convertidas en grupos de presión, como el Consejo Coordinador Empresarial, era ilegal y sin duda generó efectos negativos que atentan en contra del principio de la libertad del voto en tanto que pudieron constituir un factor determinante que influyera en el ciudadano para orientar su elección en determinado sentido. Sin embargo, consideraron que, a pesar de la existencia del conjunto de irregularidades señaladas por la oposición de izquierda, “la sola existencia de algunos spots o mensajes negativos es en sí misma insuficiente para concluir, indefectiblemente, que se ha afectado el principio de la libertad del voto”. En su opinión, “no existen elementos que permitan establecer de manera objetiva que la intención del voto de los electores fue afectada preponderantemente por la difusión de spots negativos”.

Más adelante se insiste en que sí hay un vínculo temático y una consonancia entre los spots emitidos por el PAN y los del Consejo Coordinador Empresarial, y vuelven a afirmar que existe una violación legal que quebranta los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral, pero se insiste en que “por sí misma, no es determinante para el resultado de la elección ya que no obran elementos probatorios en autos que demuestren fehacientemente el impacto de los spots difundidos por el CCE”. Y la misma cantaleta jurídica la repiten para el caso de la intromisión de la empresa Jumex a favor del PAN o de la intervención de varias empresas mercantiles: no hay medio de prueba alguno para establecer el impacto que pudo haber tenido en el proceso electoral.

En cuanto a las ilegales intervenciones del presidente Vicente Fox, el tribunal consideró que, si bien pudieron contribuir en alguna forma para determinar la intención del voto, esta influencia se vio disminuida por diferentes aspectos (la tregua navideña, el acuerdo de neutralidad y la orden decretada por la Corte de suspender la publicidad institucional); sin embargo, el tribunal acepta que, de no haber sido por estas restricciones, las declaraciones del presidente de la República se hubieran constituido en un riesgo para la validez de los comicios y podrían haber

representado un elemento importante en el resultado final de la elección.

En suma, para el tribunal, los factores de atropello a la normatividad en los comicios fueron evidentes, pero, en su apreciación —pensamos que con escaso sustento legal— no era posible medir el impacto que tuvieron sobre la intención del voto. De manera por demás subjetiva, ligera y poco apegada a la reflexión jurídica, resultaba inútil, desde su muy parcial perspectiva, cualquier esfuerzo orientado a precisar el impacto que sobre la elección presidencial tuvo el amplio conjunto de irregularidades que, a lo largo del proceso, se advirtieron. Fue poco afortunado —jurídica y socialmente— el fallo del tribunal. Aún queda impreso en la memoria de millones de mexicanos la desconfiada interrogante sobre por qué no recurrieron al *voto por voto y casilla por casilla*; por qué no investigaron a fondo las principales causales que podrían haber orientado su juicio hacia la nulidad abstracta de la elección; por qué no se tomaron el trabajo de indagar, a fondo e imparcialmente, con la información a su alcance, el impacto que tanta irregularidad tuvo sobre la intención del voto. Su decisión terminó polarizando aun más a las fuerzas políticas en pugna y exacerbando el descontento social. El gigantesco movimiento ciudadano de protesta se había transformado ya en plantón y, después del restringido fallo emitido por el tribunal, se constituyó una Convención Nacional Democrática que decidió, entre otras cosas, desconocer el veredicto de la magistratura⁶⁸.

La incertidumbre siguió comandando los procesos políticos, y la violencia amenazaba los comportamientos de los actores sociales involucrados. Persistió la intranquilidad y la molestia social, se consolidó la cultura de la desconfianza, aumentaron los momentos de ingobernabilidad en el país, y el descontento ciudadano se instaló más allá de los procesos electorales (qué mejor y preocupante ejemplo que el conflicto en Oaxaca)⁶⁹.

⁶⁸ Años después, un investigador universitario y analista político, tuvo el cuidado de revisar cuantitativamente las actas electorales a partir de la documentación oficial disponible tratando de encontrar sus inconsistencias. Después de revisar 150 de los 300 distritos legislativos, concluye que con lo revisado no es posible saber con certeza cuál fue la voluntad mayoritaria de los votantes. El tribunal Electoral validó jurídicamente el triunfo de Calderón pero no lo demostró fehacientemente. Véase José Antonio Crespo, 2006: *hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana*, Debate, México, 2008.

⁶⁹ Véase Diego Enrique Osorno, *Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI*, Grijalbo, México, 2007.

En lo inmediato, la coyuntura creada por la elección presidencial mostró las enormes debilidades de nuestro sistema democrático-electoral. Las instituciones responsables, en contra de lo publicitado a lo largo del proceso, y en contra también de su corto —y se nos hizo creer que exitoso— historial, se manifestaron incapaces, en esta ocasión, de hacer creíble el proceso de elección presidencial y de manejar con buen juicio la crisis política que generaran. Las consecuencias, hasta hoy, son graves. En lugar de consolidarse nuestro sistema democrático, el país se polarizó e inició un riesgoso proceso de enfrentamiento político al margen de los marcos establecidos por la ley electoral. A la lucha política partidista se le agregó un nuevo elemento: el ingrediente social. La disputa por el poder desplazó la desavenencia programático-partidista, para transformarse en conflicto social. El enfrentamiento rebasó a los partidos políticos y mostró con mayor claridad lo que cotidianamente se disimula: el encuentro clasista, la distinción geográfica, el comportamiento racista y discriminatorio, y el enorme abismo existente entre ricos (cada vez menos) y pobres (cada vez más).

En lo concreto, la coyuntura mostró dos grandes bloques, dos posiciones políticas, dos formas diferentes de entender la realidad nacional, dos visiones de nación que se mostraban irreconciliables. Por un lado, la alianza que apoyaba el programa del candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sintetizado en una proclama política con marcada orientación social: *Por el Bien de Todos Primero los Pobres*, integrada por los cuadros partidarios del PRD, PT y Convergencia, y, de manera prioritaria, por las extensas redes ciudadanas (movimiento social en formación), creadas desde el liderazgo de AMLO, cuyo origen social era la pobreza. Entre estas dos grandes fuerzas navegaban, de forma no definitiva y cambiante, algunas organizaciones obreras, grupos de intelectuales, organizaciones no gubernamentales y sectores de clase media.

Por el otro, el conjunto de poderes políticos y sociales que se aglutinaban alrededor del programa de Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional, legalmente reconocido como triunfador de la contienda electoral por la presidencia de la República. A este bloque lo distinguían, además de los militantes panistas, los grandes empresarios organizados, gran parte de los dueños de los medios electrónicos e impresos, la cúpula clerical de la Iglesia Católica, los viejos líderes corporativos inscritos en el Congreso del Trabajo, los líderes, igualmente corporativos, del poderoso

sindicato nacional de maestros, el SNTE, y, por supuesto, el aparato de Estado y la política utilización de sus programas sociales.

A diferencia del primer bloque, éste no formulaba con claridad un programa de gobierno alternativo, por tanto, nos atrevimos a ubicarlo dentro de la línea del continuismo: una sociedad de libre mercado imperfecta que convive, negocia, manipula o se enfrenta a un nacionalismo anacrónico. La permanencia de lo ambiguo y lo ambivalente en el quehacer de la clase política, en la indefinición de las instituciones y, en lo general, en la permanente pérdida de identidades dentro de la sociedad civil, continuaría, pensábamos, definiendo el contexto del orden social impreciso que determinaba a la nación mexicana. Cualquier tipo de acción de gobierno orientada a consolidar un orden neoliberal —la reforma energética, por ejemplo— habría de encontrar la oposición del bloque opositor de la izquierda en sus dos vertientes: como movimiento social y como segunda mayoría parlamentaria en el Congreso y cualquier proyecto institucional destinado a mejorar los niveles de vida de la población marginal se topará también con la oposición de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que, por encima incluso de la ley y en defensa de sus privilegios, impulsaron a como diera lugar el triunfo del candidato panista.

Legalizado el triunfo calderonista, que no legitimado, ni al interior de la clase política mexicana, ni dentro de las fuerzas sociales enfrentadas, ni en la interrelación entre la una y las otras, se mostraba disposición al diálogo. En ese problemático entorno, el nuevo gobierno, pensamos, difícilmente lograría salir del vacío político que, al menos desde el 1° de enero de 1994, vivía el país, y seguiría padeciendo, en diversos territorios —especialmente en aquellos donde florece la pobreza— tiempos de ingobernabilidad cada vez más alargados.

Resultaba problemático imaginar que enfrentaría con éxito el reto de hacer crecer a la economía mexicana más allá del equilibrio macroeconómico, que enfrentaría decididamente la apremiante necesidad de fortalecer y encadenar nuestra planta productiva a través de la modernización tecnológica, la productividad y la competencia externa, y que aceptaría el inaplazable esfuerzo por combatir con eficiencia y realismo político la generalizada situación de pobreza que sufren la inmensa mayoría de mexicanos. Era en ese momento discutible suponer cambios sustanciales a las instituciones responsables de impartir la justicia, de afianzar la seguridad social, de resolver los acuciantes problemas de

seguridad pública, de eficientar el sistema educativo nacional, etc. Era complicado concebir, insistimos, que existiera voluntad y fuerza política en el nuevo gobierno para terminar con las cada vez más dilatadas inercias de inmovilidad y pasmo que han acompañado a los últimos cuatro gobiernos, incapaces de definir con claridad, sin ambigüedades y sin ambivalencias, el rumbo de la nación.

¿Podría el presidente electo unificar a los mexicanos en un proyecto? ¿Podría terminar con la creciente polarización social, con el encono, con los agravios y con la inquietante preocupación de enfrentamientos sociales? ¿Cumpliría con las exigencias de los señores del dinero, responsables directos de su triunfo —las famosas reformas estructurales pendientes— sin afectar los intereses y sin incrementar el peso de las afrentas a los integrantes del otro bloque, ahora organizado para la lucha civil y legislativamente fuerte?

¡No!, después de tres años de gobierno bien podemos afirmar que el rumbo que tomó el país enrareció todavía más el ambiente político. La economía siguió estancada y, para fines del 2008, se vio inmersa en una inquietante crisis financiera mundial que anuló, no sabemos por cuanto tiempo, cualquier posibilidad de crecimiento; los partidos políticos profundizaron sus prácticas corruptas avalados por un ambiente de impunidad que les permitía casi cualquier cosa; el poder político, legalmente constituido, se fragmentó aún más: a quererlo o no, el Ejecutivo tuvo que compartirlo con partidos políticos, con poderes regionales, con poderes económicos nacionales y trasnacionales y con el crimen organizado, gobernar el país se convirtió en la más grande de las dificultades. En este entorno de descomposición, la violencia sentó sus reales en todo el territorio nacional. Y si todo esto no fuera suficiente para dificultar el acto de gobernar, la clase política mexicana, lejos de caminar en la búsqueda de reconciliaciones pendientes, se dedicó a ahondar sus diferencias: nunca como en estos tres últimos años los agravios por tantos años guardados salieron a la luz en forma de testimonios acusadores que desestabilizaban el ejercicio del poder.

Ante tanta dificultad, tan poca voluntad política y tan adversas condiciones económicas mundiales, advertimos una línea de continuismo político-económico del gobierno calderonista que empantanará, imposible saber por cuantos años más, las posibilidades de un cambio definitivo de orden institucional que nos defina nuevamente como nación, sólo que ahora en un entorno político más enrarecido y proclive a incrementar la violencia social.

Con lo hasta hoy experimentado en el país, resulta evidente concluir que esta coyuntura se agregará a la ya larga lista de momentos históricos privilegiados en que los actores políticos y sociales, inmiscuidos en nuestro largo periodo de modernidad sin rumbo, pudieron definir el inquietante tiempo de incertidumbre que vive el país desde 1983.

A manera de conclusión, un breve recordatorio histórico

Ratificamos que cinco coyunturas indefinidas y cinco periodos frustrados mantienen hasta el día de hoy el carácter híbrido del Estado mexicano. Híbrido por la contradicción no resuelta entre redes de significación cultural de un pasado nacionalista arraigadas con fuerza en la conciencia de la clase política mexicana y que aún determinan de manera importante su comportamiento (corrupción, clientelismo, compadrazgos, caciques, caudillos, imaginarios corporativos...), y las frágiles construcciones ideológicas de un orden neoliberal que pretende imponer —con muy relativo éxito— una sociedad de libre mercado (democracia, libertad, derechos humanos, productividad, competencia, calidad total...). Y si históricamente queremos ser más estrictos para definir como híbrido el incierto, contingente y riesgoso tiempo de construcción de un orden neoliberal en México, tendremos que hacer alusión a un conjunto de elementos problemáticos que se remontan al origen de nuestra existencia como nación independiente —en realidad más lejos— y que todavía se encuentran distanciados de soluciones posibles. Nos referimos en concreto, y de manera especial, a las dos grandes discordancias que atraviesan nuestra historia patria, a las dos grandes paradojas que, después de casi 200 años —seguramente más— siguen sin resolverse y continúan redefiniendo la vida política y social de la nación mexicana: por un lado, legalidad contra legitimidad, por el otro, justicia contra legalidad.

Un somero repaso por los grandes acontecimientos desde los cuales tratamos de leer nuestra biografía, o más importante aun, un reconocimiento del anónimo caudal de nuestro histórico tiempo largo, nos hará topár, obligadamente, a cada paso de nuestro acontecer, con estas dos grandes calamidades que hoy hacen imposible consolidar una sociedad democrática que supere su simulado estatus de autenticidad. Toda la lucha social en México, toda la lucha política opositora, más aún, el fondo mismo de nuestra vida

cotidiana, resuelve sus contradicciones dentro del desigual equilibrio que establecen estas fuerzas contrarias a cualquier tipo de modernidad, a cualquier tipo de democracia: la legalidad rara vez empata con la legitimidad, y la justicia difícilmente puede entenderse como sinónimo de legalidad, y de estas contradicciones engendradas desde nuestro pasado colonial, nacieron también los demonios que atormentan nuestra existencia: la impunidad, la corrupción y el patológico amor por lo corporativo.

La Revolución Mexicana impuso un orden social legitimado, que se apoyó en estas paradojas infames que hicieron florecer la impunidad, la corrupción y la corporativización política de lo social bajo la puntual vigilancia de la simbólica figura presidencial; con nuestra primera coyuntura inicia el proceso de desdibujar la fuerza simbólica del *señor presidente*, pretendiendo conjurarla con la democracia procedimental dentro de una sociedad de libre mercado. Ya vamos para 30 años con esta intención que lejos de fortalecerse se debilita. Ya no existe el viejo orden nacionalista pero sí su poderosa cultura política que hoy, sin control, ha hecho imposible el tránsito de nuestro país hacia un nuevo orden en el que podamos identificarnos.

Nuestras cinco coyunturas, aparentemente orientadas a una nueva sociedad democrática, mantienen nuestras históricas paradojas: la ilegitimidad de lo legal y lo injusto de la legalidad, sólo que ahora, sin un orden socialmente legitimado de por medio, nos hicimos ambiguos, pasamos a ser ambivalentes y terminamos siendo híbridos. Perdemos rápidamente referentes ideológicos que nos identifiquen.

El problema que se nos plantea va más allá de la política, más allá de un proceso electoral por conflictivo que haya sido, enfrentamos una complicación más grande, un dilema de cultura nacional: ¿cómo ser legítimo en un marco de legalidad?, ¿cómo alcanzar la justicia social sin tener que violentar el derecho?, ¿cómo hacer valer la dignidad y el respeto social sin transgredir la norma? Persiste en el imaginario social el agravio enraizado en la memoria de decenas de generaciones lastimadas por la miseria, humilladas por el despojo realizado a sus derechos fundamentales e ignoradas por un poder, al parecer inmarcesible, que nunca ha tenido la costumbre de ver y mucho menos de escuchar hacia abajo. Nuestro querido México de las tres revoluciones no ha logrado conciliar legalidad y justicia, y por ello, la legitimidad política continuará, como siempre, en entredicho... y no pensamos que hoy existan condiciones para sanar tan profundas heridas.

HABLO POR MI DIFERENCIA

DE LA IDENTIDAD GAY
AL RECONOCIMIENTO
DE LO QUEER



Mauricio List Reyes

Gay
socials